

MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROV.
DE BUENOS AIRES

COMISIÓN DE REFORMAS EN MATERIA PROCESAL
CARCELARIA Y DE MENORES

RODOLFO MORENO — EUSEBIO GÓMEZ

PROYECTO DE LEY

ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
EN
MATERIA PENAL



LA PLATA
TALLER DE IMPRESIONES OFICIALES

1935

3101

114

1

MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES



COMISIÓN DE REFORMAS EN MATERIA PROCESAL
CARCELARIA Y DE MENORES

RODOLFO MORENO — EUSEBIO GÓMEZ

PROYECTO DE LEY

ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
EN
MATERIA PENAL

BIBLIOTECA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION	
Nº 1	3101
CD.	
FICHA MATERIA	

LA PLATA
TALLER DE IMPRESIONES OFICIALES

1935

400282



61060



DECRETO DEL PODER EJECUTIVO CREANDO LA COMISION Y DESIGNANDO A SUS COMPONENTES

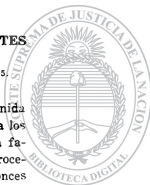
La Plata, 5 de abril de 1935.

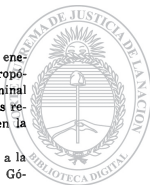
Considerando:

Que la Convención reformadora de la Constitución reunida el pasado año 1934, cambió las bases establecidas respecto a los juicios criminales y correccionales, dando a la Legislatura facultades amplias para organizar la justicia y fijar los procedimientos. Suprimió, en efecto, de la Constitución entonces vigente, el artículo 15 y sus concordantes o sea los preceptos que disponían el establecimiento del juicio por jurados e introdujo el artículo 154 que faculta al Poder Legislativo para crear en el orden represivo, cámaras de apelación y tribunales o jueces;

Que las reglas fundamentales, antes en vigor, no tuvieron nunca aplicación, por cuanto el jurado no se implantó, manteniéndose, como si fuera permanente, una organización autorizada sólo en carácter transitorio. La nueva Constitución sin imponer un sistema determinado ha conferido al Poder Legislativo las facultades precisas para dictar las leyes de organización de la justicia y para fijar los procedimientos a seguirse, pero no obstante la amplitud de los preceptos, en la Convención reformadora se expresaron anhelos en el sentido de que se implantara para los procesos criminales y correccionales, el juicio oral y público, sugestión que debe recogerse, no sólo teniendo en cuenta la autoridad de aquel cuerpo, sino los ensayos efectuados en la Provincia, las opiniones de los publicistas y la legislación de los países más adelantados del mundo;

Que a mérito de los preceptos constitucionales en vigencia, la Legislatura se encuentra autorizada para sancionar un código de procedimientos en lo criminal y correccional sin las restricciones anteriores, debiendo solo sujetarse y cualquiera fuese el sistema adoptado, al mantenimiento de las garantías que con carácter esencial, fija la misma carta y que forman parte de los derechos individuales;





Que el Poder Ejecutivo por decreto N° 85 de fecha 29 de enero del corriente año 1935, resolvió poner en marcha el propósito de que se dicte un código de Procedimientos en lo criminal y correccional, que responda a los adelantos de la época, a los resultados de la experiencia y a los propósitos enunciados en la Convención Constituyente;

Que a tales efectos y para preparar el proyecto destinado a la consideración de la Legislatura, se designó al Dr. Eusebio Gómez, el cual debía trabajar conjuntamente con el titular de la cartera de gobierno, doctor Rodolfo Moreno. Tal decreto no tuvo principio de ejecución, no habiendo tenido lugar ninguna reunión de la comisión para iniciar el trabajo, a causa del retiro del doctor Moreno del cargo que desempeñaba;

Que el problema a que se encuentra avocada la Provincia en materia penal, no es sólo de contar con un código de procedimientos que reuna las reglas necesarias para el juzgamiento de las personas acusadas. En el momento presente se requieren además, las siguientes leyes:

- a) Orgánica de la justicia en lo criminal y correccional;
- b) Carcelaria, destinada a organizar los establecimientos penales y de detenidos, con un plan que comprenda el presente, las ampliaciones de un futuro próximo y las demás modificaciones o previsiones requeridas;
- c) De menores, destinada a considerar la situación de los menores delincuentes no imputables, los menores delincuentes imputables, los menores abandonados y aquellos que deben ser sacados del poder de sus padres y guardadores, debiendo tenerse en consideración, todas las situaciones previstas por el Código Penal y por las leyes de menores y patronato;
- d) Patronato de liberados en el orden local para contribuir dentro de la Provincia al cumplimiento de los objetivos propuestos por el Código Penal;
- e) Registro local de reincidencia, en concordancia con el nacional y a los efectos de la mayor eficiencia preventiva y represiva;
- f) Procedimientos generales en materia de faltas, determinando de manera precisa a qué autoridad o autoridades corresponde la facultad de dictar las ordenanzas o edictos y en qué forma deben hacerse efectivos, tanto el juicio de aquellas como las represiones;



Que será necesario además, proyectar los reglamentos para los establecimientos de detenidos, por cuanto, de acuerdo con la nueva Constitución, se han transferido a la jurisdicción del Poder Ejecutivo los que antes dependían de la Corte Suprema, y que se encuentran regidos por estatutos anticuados y diversos, siendo precisa la unidad y la modernización;

Que todo este vasto trabajo no puede ser afrontado por los funcionarios públicos ni es fácil que pueda ser presentado por la iniciativa individual de los señores legisladores. Por otra parte, como se trata de cuestiones vinculadas las unas con las otras, es conveniente que todo se prepare con unidad de concepto a fin de la mayor eficiencia;

Que el Poder Ejecutivo desea someter a la Legislatura, el conjunto de proyectos relativos a la prevención y represión dentro del orden local, y a tales efectos, lo más acertado es seguir el procedimiento que se ha empleado en la Nación y en la Provincia en casos análogos, o sea la designación para preparar los proyectos, de personas competentes, a las cuales se encargue el trabajo;

En virtud de estas consideraciones,
El Poder Ejecutivo —

DECRETA :

Art. 1º Designase a los señores doctores Rodolfo Moreno y Eusebio Gómez, para que redacten los siguientes proyectos :

- a) Código de Procedimientos en lo criminal y correccional.
- b) Organización de la justicia en lo criminal y correccional.
- c) Organización carcelaria, comprendiendo el régimen local de los establecimientos para penados y detenidos, las modificaciones y ampliaciones en ambos y las reformas que se consideren convenientes.
- d) Patronato de liberados.
- e) Menores delincuentes imputables y no imputables y menores abandonados o que por cualquier causa deban estar a cargo del Estado.
- f) Registro local de reincidencias.
- g) Procedimiento sobre faltas y normas generales respecto a éstas.

Art. 2º La comisión nombrada podrá requerir datos e informaciones de las oficinas públicas, las cuales estarán obligadas a proporcionarlos directamente.

Art. 3° La comisión presentará al Ministerio de Gobierno su plan de trabajos y procurará la terminación de los mismos dentro del año legislativo.

Art. 4° Comuníquese, etc.

RAUL DIAZ.
VICENTE SOLANO LIMA.



RESPUESTA DEL DOCTOR MORENO

La Plata, 8 de abril de 1935.

*Señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
doctor don Vicente Solano Lima. — Capital.*

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para manifestarle que he recibido la nota en la cual se sirve hacerme saber la designación de que he sido objeto para preparar diversos proyectos en unión con el doctor Eusebio Gómez. Acepto con mucho gusto esa designación y me propongo trabajar con empeño para dar término al trabajo. He hablado al respecto con el doctor Gómez y en breve presentaremos a ese Ministerio nuestras bases de acuerdo con el Decreto.

Agradezco a V. E. la distinción hecha a mi respecto y le ruego quiera hacer presente esta misma expresión al señor Gobernador.

Lo saluda con su más alta consideración.

RODOLFO MORENO.

NOTA DEL DOCTOR GOMEZ

Buenos Aires, 9 de abril de 1935.

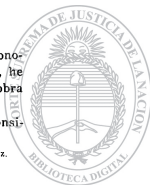
*Al señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires,
doctor Vicente Solano Lima.*

Tengo el honor de dirigirme a V. E. acusando recibo de su atenta nota de fecha 5 del corriente en la que se sirve comunicarme que, por decreto cuya copia acompaña, el Poder Ejecutivo ha tenido a bien designarme para redactar, conjuntamente con el doctor Rodolfo Moreno, diversos proyectos relacionados con la organización de la justicia.

Al aceptar el honroso mandato, con el más vivo reconocimiento, me es grato manifestar al señor Ministro que, he de trabajar con el mayor empeño, para dar cima a la obra de que se trata.

Saludo al señor Ministro con mi más distinguida consideración.

EUSEBIO GÓMEZ.



NOTA ACOMPAÑANDO EL PROYECTO DE LEY ORGANICA

La Plata, 23 de julio de 1933.

Señor Ministro de Gobierno, doctor Vicente Solano Lima.
— *Su Despacho.*

Tenemos la satisfacción de dirigirnos al señor Ministro para presentar a la consideración del Poder Ejecutivo el proyecto de ley orgánica para la administración de justicia en materia penal. Acompañamos al mismo una exposición de motivos donde se encuentran los fundamentos y demás explicaciones que hemos creído necesario a los efectos de la mejor comprensión.

Cuando cada uno de nosotros acusó recibo a la nota de V. E. en la cual nos comunicaba el decreto de 5 de abril del corriente año que nos designaba para llevar a término un vasto trabajo de carácter legislativo, hicimos presente que presentaríamos las bases del mismo a fin de que la orientación de nuestra labor fuera conocida de antemano por el Poder Ejecutivo y se hiciera en concordancia con las ideas del señor Gobernador y del señor Ministro. Esta tarea era fácil, por otra parte, desde que partíamos de una base común, cual era la de proyectar instituciones que transformaran nuestros viejos procedimientos e implantaran en Buenos Aires el sistema de juicio oral y público.

Como el trabajo debía hacerse paulatinamente preferimos de acuerdo con V. E. prescindir de las bases escritas, ya que ellas surgían del decreto del Poder Ejecutivo y poner en conocimiento de V. E., para la respectiva consulta, la labor que íbamos realizando y sus características. En las conversaciones que hemos mantenido con el señor Gobernador y con V. E. ha po-



dido seguirse el desenvolvimiento del trabajo que ha contado con el auspicioso apoyo del Poder Ejecutivo.

La ley orgánica es inseparable del código. La organización que se proyecta no serviría para los procedimientos actualmente en vigencia, de manera que la sanción de este nuevo estatuto tendría que hacerse con la del nuevo código. La redacción de éste se encuentra terminada debiendo hacerse la última revisión para la copia definitiva acompañada también de una exposición de motivos.

Como el señor Gobernador y V. E. conocen ya el proyecto de ley orgánica que presentamos ahora oficialmente, consideramos conveniente, a los efectos de ganar tiempo, que se disponga de inmediato la impresión en un volumen del proyecto de ley orgánica y su exposición anexa, junto con el decreto de 5 de abril y resultados de la encuesta promovida por esta comisión especial. Cuando la copia del proyecto de código se encuentre terminada, se podría disponer la impresión de otro volumen.

Si V. E. acepta este temperamento, nosotros nos encargáramos de entendernos con los talleres oficiales y de corregir las pruebas.

Saludan al señor Ministro con alta consideración.

RODOLFO MORENO, EUSEBIO GÓMEZ.

ORGANIZACION DE LA JUSTICIA EN MATERIA PENAL



Proyecto de ley

I

Art. 1° La administración de justicia en materia penal será ejercida por tribunales colegiados, jueces y funcionarios auxiliares.

II

Art. 2° Habrá un Tribunal por lo menos en cada uno de los seis Departamentos judiciales con sede en: La Plata, Mercedes, San Nicolás, Dolores, Bahía Blanca y Azul, respectivamente.

Art. 3° El Departamento de la Capital comprenderá los distritos de: La Plata, Almirante Brown, Avellaneda, Brandsen, Campana, Cañuelas, Chascomús, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, General Belgrano, Las Heras, General Paz, General Rodríguez, General Sarmiento, General J. F. Uriburu, Las Conchas, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Marcos Paz, Matanza, Merlo, Monte, Moreno, Navarro, Pilar, Quilmes, Roque Pérez, Saladillo, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Vicente, Seis de Septiembre, Tandil y Vicente López.

El Departamento del Centro los distritos de: Mercedes, Alberti, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Carlos Pellegrini, Carlos Tejedor, Carmen de



Areco, Chacabuco, Chivilcoy, General Viamonte, General Pinto, General Villegas, Junín, Leandro N. Alem, Luján, Lincoln, Marcelino Ugarte, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Suipacha, Trenque Lauquen y Veinticinco de Mayo.

El Departamento del Norte los distritos de: San Nicolás, Baradero, Bartolomé Mitre, Colón, General Arenales, Pergamino, Ramallo, Rojas y San Pedro.

El Departamento del Sud los distritos de: Dolores, Ayacucho, Balcarce, Castelli, Coronel Vidal, General Alvarado, General Conesa, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Pueyrredón, Lobería, Maipú, Necochea y Pila.

El Departamento de Costa Sud los distritos de: Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Caseros, Coronel Dorego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, González Chaves, Guaminí, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino.

El Departamento de Sudoeste los distritos de: Azul, Juárez, General Alvear, General Lamadrid, Las Flores, Laprida, Olavarria, Rauch y Tapalqué.

Art. 4º Los Tribunales del Crimen tendrán tres miembros. El número de Tribunales en cada Departamento será establecido por la Ley de Presupuesto.

Art. 5º Los miembros de los Tribunales del Crimen serán nombrados en la forma prescripta por el artículo 167 última parte de la Constitución y removidos de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 172 de la misma Constitución y la ley correspondiente.

Art. 6º Cada Tribunal tendrá un Secretario abogado y los demás empleados que determine la Ley



de Presupuesto. El Secretario y los empleados serán designados y separados de sus cargos por el Tribunal al cual correspondan. La remoción de los mismos no podrá hacerse sino previo sumario y con causa justificada. El Tribunal podrá tomar respecto a los empleados medidas disciplinarias que consistirán en apercibimiento o suspensión. Si la suspensión fuera dispuesta por más de quince días, el Tribunal deberá designar reemplazante al empleado suspendido, mientras dure el término de la sanción disciplinaria.

Art. 7° Corresponderán también al Tribunal todas las medidas relativas a la organización del personal de su dependencia, concesión de licencias y designaciones de carácter provisional. Si las licencias excedieran de un mes, deberá nombrarse reemplazante temporal al empleado ausente.

Art. 8° El Tribunal que funcione en cada Departamento será designado con el nombre de «Tribunal del Crimen» del Departamento de la Capital, del Centro, del Norte, del Sud, de Costa Sud y de Sud Oeste, en cada caso.

Art. 9° Todo Tribunal se organizará designando por sorteo un Presidente y un Vicepresidente. Esas funciones durarán un año, debiendo al terminarse el período, ocupar la Presidencia el Vice y este último cargo el vocal, continuando la rotación en la misma forma en los períodos sucesivos.

Art. 10. No podrán formar parte del mismo Tribunal los parientes en línea ascendente y descendente cualquiera sea su grado y los parientes en línea colateral, dentro del cuarto grado de consanguinidad y tercero de afinidad.



III

Art. 11. El Tribunal del Crimen juzgará en juicio oral y público a las personas imputadas de haber incurrido en delito dentro de las reglas establecidas por el Código de Procedimientos en materia penal.

Conocerá también en grado de apelación de las resoluciones de los jueces de instrucción que conforme al Código de Procedimientos en materia penal sean susceptibles de ese recurso.

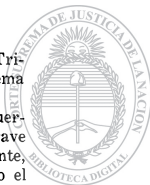
Art. 12. El Tribunal deberá juzgar y pronunciar veredicto con la concurrencia de los tres jueces que lo forman o sus reemplazantes legales. Para pronunciarse en los recursos de apelación bastarán dos miembros siempre que hubiese conformidad de opiniones.

IV

Art. 13. El Tribunal funcionará todo el año no estando autorizado el feriado.

Art. 14. Se fijarán tres días de audiencia en cada semana por lo menos para la substanciación de las causas en juicio oral y público de acuerdo con las reglas procesales.

Art. 15. En cada Tribunal se llevará por el Secretario un libro que estará a disposición del público, en el que se harán constar los acuerdos y audiencias celebrados, los miembros que asistan a cada uno de ellos, la causa por la cual no concurrieron los ausentes, la hora de apertura y clausura de cada acuerdo o audiencia, los asuntos entrados a despacho del Tribunal y tanto los tratados y resueltos como los postergados.



Art. 16. Las licencias a los miembros del Tribunal sólo podrán ser acordadas por la Suprema Corte de Justicia con causa justificada.

Art. 17. La inasistencia consecutiva a dos acuerdos o audiencias sin licencia se reputa falta grave y siempre que el hecho tenga lugar, el Presidente, Vice o miembro que concurra y en su defecto el Secretario deberá ponerlo en conocimiento del Procurador General a los efectos de la acusación ante el Jurado de Magistrados y de la Suprema Corte para que pueda adoptar las medidas disciplinarias que juzgue convenientes.

Art. 18. El Tribunal se encuentra sujeto a las medidas que la Suprema Corte de Justicia establezca en su reglamento, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 152 de la Constitución.

Art. 19. Cada Tribunal, sin perjuicio de encontrarse sujeto a las disposiciones reglamentarias de esta ley y a las medidas que dicte la Suprema Corte de Justicia, dentro de sus atribuciones, está autorizado para dictar su reglamento interno.

V

Art. 20. Los Tribunales del Crimen podrán imponer a todas las personas que intervengan en los juicios en cualquier carácter y ya sean funcionarios, partes, letrados, apoderados, testigos, peritos u otros, correcciones disciplinarias que consistirán en:

Apercibimiento.

Multa hasta doscientos pesos.

Detención hasta diez días.

Art. 21. Cuando la multa no fuera abonada dentro del término perentorio que se fije, se aplicará



detención, a razón de un día por cada veinte pesos de aquélla. Cuando la corrección consistiere en detención, ésta no podrá ser compensada por dinero.

Art. 22. La corrección disciplinaria, aun la consistente en detención, no es obstáculo para el procesamiento cuando además se hubiere incurrido en delito.

Art. 23. El Tribunal podrá imponer correcciones disciplinarias por los motivos siguientes:

Falta de respeto al Tribunal o a sus miembros, a juicio del mismo;

Desobediencia de las personas que intervinieren en los juicios en cualquier carácter a las observaciones del Tribunal;

Obstrucción del procedimiento y de la regularidad de los juicios por cualquier interviniente;

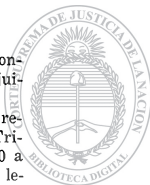
Quebrantamiento de las reglas de decoro que deben guardarse a juicio del Tribunal;

Injurias entre partes, intervinientes en cualquier carácter, o concurrentes, que a juicio del Tribunal implicaran falta de respeto al mismo.

Art. 24. Las correcciones disciplinarias no serán objeto de recurso alguno y podrán ser impuestas también a los asistentes a las audiencias que en cualquier forma y a juicio del Tribunal le falten el respeto.

VI

Art. 25. Las audiencias que celebren los Tribunales del Crimen serán públicas salvo el caso que el Tribunal por motivos excepcionales considere indispensable ventilar un juicio en privado. En tales casos, la concurrencia se limitará a los intervinientes y personas a las cuales se concediera un per-



miso especial. El Tribunal podrá impedir la concurrencia de menores a todos o determinados juicios y de mujeres, según los casos.

Art. 26. Las disposiciones del Código Penal referentes al falso testimonio y al desacato a los Tribunales y Jueces, lo mismo que los artículos 20 a 24 de esta ley, serán colocados en carteles bien legibles en las salas de audiencia.

Art. 27. Al iniciarse la substanciación de todo juicio, se advertirá a las personas que intervengan las responsabilidades en que incurrirán los que infrinjan los preceptos del Código Penal y de esta ley orgánica.

Art. 28. El Tribunal funcionará en la ciudad cabeza del Departamento Judicial a que pertenezca. Cuando lo considere oportuno por cualquier motivo podrá trasladarse al distrito donde el delito fué cometido a los efectos del juicio oral y público y del veredicto correspondiente.

VII

Art. 29. En los casos de impedimento para intervenir en una causa, los miembros del Tribunal serán reemplazados:

a) Por los componentes del otro u otros Tribunales del Crimen, si hubiere más de uno en el Departamento;

b) Por los Camaristas de lo Civil y Comercial, cuando no hubiere en el Departamento sino un Tribunal o cuando los miembros del otro u otros Tribunales del Crimen no pudiesen intervenir debido a cualquier causa.

Art. 30. Los miembros de los Tribunales del Crimen, dentro del mismo Departamento se reemplazan.



zarán recíprocamente, no procediendo la integración del Tribunal con Camaristas de lo Civil y Comercial, sino cuando no hubieren miembros de alguno de los Tribunales del Crimen en condiciones de intervenir.

Art. 31. Las reglas de los dos artículos anteriores se aplicarán a los casos en que un Tribunal se encontrare desintegrado a causa de renuncia, licencia, ausencia, enfermedad o cualesquier otro motivo.

Art. 31. Cuando en un Departamento Judicial no pudiese formarse el Tribunal del Crimen por no ser posible reunir ni con los titulares ni con los reemplazantes legales el número preciso para el funcionamiento, el asunto será enviado a otro Departamento, rigiendo el siguiente orden correlativo: Capital, Centro, Norte, Sud, Costa Sud y Sud Oeste.

VIII

Art. 33. En cada Departamento funcionarán los juzgados de instrucción que fije la Ley de Presupuesto.

Art. 34. Los Jueces de Instrucción serán nombrados de acuerdo con lo establecido por el artículo 168 de la Constitución y removidos conforme a las reglas del artículo 172 de la misma y preceptos de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados.

Art. 35. Cada Juez de Instrucción tendrá un Secretario abogado o escribano y los empleados que le asigne la Ley de Presupuesto.

Art. 36. El Secretario y los empleados de los Jueces de Instrucción serán nombrados y removidos mediando causa por la Suprema Corte de Justicia, a



propuesta y a pedido, según el caso, del Juez al cual correspondan.

Art. 37. El Juez podrá por su sola autoridad, apercibir a los empleados de su dependencia y suspenderlos por un término que no exceda de cinco días. La suspensión de los Secretarios sólo podrá hacerse efectiva por la Suprema Corte con causa fundada y a pedido del Juez.

Art. 38. Las licencias a los Secretarios y empleados de los Jueces de Instrucción sólo podrán ser concedidas por la Suprema Corte, previo informe del Juez.

Art. 39. Si la licencia a los Secretarios y empleados excediere de un mes, deben ser reemplazados mientras perdure aquélla.

IX

Art. 40. Los Jueces de Instrucción deberán instruir los sumarios en la forma fijada por el Código de Procedimientos en materia penal y tendrán las demás atribuciones y deberes que aquél prescribe. La instrucción podrá ser hecha directa y personalmente por el Juez, o por medio de los funcionarios auxiliares.

Art. 41. Los Jueces de Instrucción conocerán en las apelaciones que autorice la ley de faltas, haciendo cosa juzgada la resolución que dicten.

Art. 42. Los artículos 20 a 23 inclusive de esta ley, rigen para los Jueces de Instrucción. Las correcciones que apliquen podrán ser recurridas ante el Tribunal del Crimen.

Art. 43. Los Jueces de Instrucción se reemplazarán entre sí en todos los casos de impedimento por cualquier causa. Cuando todos estuvieren im-



pedidos o cuando no hubiese más que un Juez de instrucción en el Departamento, el reemplazo corresponderá a los Jueces de lo Civil y Comercial. Si en un Departamento judicial se encontrasen impedidos todos los Jueces el asunto será enviado al Juez de otro Departamento en el siguiente orden: Capital, Centro, Norte, Sud, Costa Sud y Sud Oeste.

X

Art. 44. En cada Distrito habrá por lo menos un Comisario Instructor, encargado del sumario de prevención en la forma y bajo las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos en materia penal.

Art. 45. El Comisario Instructor deberá tener título de: Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Abogado, Escribano o Procurador Universitario.

Art. 46. El nombramiento de Comisario Instructor, será hecho por el Poder Ejecutivo. La remoción del mismo requerirá causa justificada y será efectuada:

a) Por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Tribunal correspondiente;

b) Por el Poder Ejecutivo a solicitud del Tribunal. En este último caso el Tribunal deberá contar con la opinión unánime de sus tres miembros componentes.

Art. 47. Cuando el Poder Ejecutivo entendiéndose necesaria la separación del cargo, establecida la causal deberá dirigirse al Tribunal y requerir el acuerdo, sin cuyo requisito tal separación no podrá hacerse efectiva.



Art. 48. Cuando el Tribunal entendiese unánimemente que procede la separación, se dirigirá al Poder Ejecutivo requiriendo la medida, la cual deberá ser decretada. El Tribunal en esos casos podrá suspender al Comisario Instructor al elevar el pedido al Poder Ejecutivo.

En todos los casos el reemplazo corresponderá al Poder Ejecutivo.

Art. 49. Los Comisarios Instructores actuarán teniendo como auxiliares a los empleados de la Policía de Seguridad.

Art. 50. Los Comisarios Instructores tendrán las atribuciones y deberes indicados en el Código de Procedimientos en materia penal y en la ley sobre faltas.

Art. 51. Los Comisarios Instructores se reemplazarán entre sí, en la forma y en los casos que determine el Código de Procedimientos.

XI

Art. 52. El Ministerio Público será ejercido por Fiscales, Agentes Fiscales y Defensores de Pobres.

Art. 53. En cada Departamento Judicial habrá por lo menos un Agente Fiscal del Crimen.

Art. 54. Corresponde a los Fiscales y Agentes Fiscales:

1° Promover la averiguación de todo delito y el enjuiciamiento de los autores dentro del Departamento en que desempeñen sus funciones debiendo requerir las medidas necesarias ante los Jueces de Instrucción o funcionarios instructores. La iniciativa deberá tomarse cuando tuvieren noticia del



delito por cualquier medio, con la sola excepción de aquellos a que corresponde acción privada;

2° Asistir al examen de testigos y verificación de toda clase de pruebas;

3° Ejercitar todas las acciones y recursos autorizados por el Código de Procedimientos en materia penal;

4° Velar por el cumplimiento del mismo Código en todo lo referente a términos en la sustanciación de los procesos;

5° Intervenir en la instrucción del sumario como parte;

6° Asumir en los juicios la función de acusador público.

Art. 55. Los Fiscales y Agentes Fiscales serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y removidos en la forma determinada por el artículo 172 de la Constitución y la ley de enjuiciamiento.

Art. 56. Cuando en un Departamento Judicial sólo hubieren Agentes Fiscales, éstos actuarán ante la justicia de instrucción y ante el Tribunal del Crimen. Cuando hubieren Fiscales y Agentes Fiscales, los primeros actuarán ante el Tribunal y los segundos ante la justicia de instrucción.

Art. 57. En todos los casos de impedimento, los Fiscales serán reemplazados: entre sí cuando hubiese más de uno; por los Agentes Fiscales, cuando no hubiesen más Fiscales o estuviesen impedidos; por los Fiscales de Cámara y Agentes Fiscales en lo Civil y Comercial sucesivamente; por los Asesores de Menores; y por los Defensores de Ausentes.

Art. 58. Los Agentes Fiscales se reemplazarán entre sí y en subsidio por los Agentes Fiscales en lo

Civil y Comercial, los Asesores de Menores, los Defensores de Ausentes y los Defensores de Pobres sucesivamente.



XII

Art. 59. El personal dependiente de los Fiscales será designado y removido por la Suprema Corte de Justicia a propuesta de los respectivos funcionarios del Ministerio Público.

Art. 60. La remoción de tales empleados no podrá ser efectuada sino con causa fundada.

XIII

Art. 61. En cada Departamento Judicial habrá por lo menos un Defensor de Pobres, encargado de defender a los procesados que no tuvieren medios para costearse un defensor particular. Esta defensa se ejercerá aunque el acusado se oponga y siempre que no se haga cargo de la misma otro defensor propuesto por aquél.

Art. 62. Los Defensores de Pobres serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y removidos en la forma determinada por el artículo 172 de la Constitución y la ley de enjuiciamiento.

Art. 63. Los Defensores de Pobres se reemplazarán entre sí cuando hubiere más de uno en el Departamento. Si hubiere uno sólo o todos estuviesen impedidos serán reemplazados por los Defensores de Ausentes.

Cuando todos los funcionarios del Ministerio Público encargados de la defensa, estuvieren impedidos, el Tribunal designará Defensor de Pobres



para el caso a un abogado de la matrícula, el que estará obligado a desempeñar el cargo gratuitamente.

Art. 64. El personal dependiente de los Defensores de Pobres será nombrado y removido por la Suprema Corte de Justicia a propuesta del Defensor de quien dependan. La remoción sólo podrá efectuarse con causa fundada.

XIV

Art. 65. Las disposiciones de los artículos 37, 38 y 39 rigen para los empleados dependientes del Ministerio Público.

XV

Art. 66. La Ley de Presupuesto creará en los Departamentos los peritos oficiales que sean necesarios.

Art. 67. Todo funcionario público estará obligado a prestar su concurso a los Tribunales, Jueces y funcionarios auxiliares de la instrucción, como peritos en los asuntos que correspondan a su título profesional o a su competencia. La negativa a esa colaboración será causa para la separación del funcionario del cargo que desempeña.

XVI

Art. 68. La competencia de los magistrados creados por esta ley se extenderá al conocimiento, instrucción y juzgamiento de todos los delitos previstos y penados por el Código Penal.

EXPOSICION DE MOTIVOS



La justicia en lo criminal tiene una organización que corresponde a las reglas de carácter procesal fijadas en el Código respectivo. El actual sistema cuenta con Jueces de Primera Instancia que lo son a la vez de instrucción y de sentencia, Cámaras de Apelación y Suprema Corte de Justicia, esta última destinada a pronunciarse en los casos que se interponga el recurso extraordinario de inconstitucionalidad o el de inaplicabilidad de ley.

El Ministerio Fiscal está representado por el Procurador de la Suprema Corte, los Fiscales de Cámara y los Agentes Fiscales.

El procedimiento es escrito debiendo tener esa forma las presentaciones de las partes, las diligencias de toda clase que se lleven a cabo con motivo del proceso y las resoluciones de los magistrados.

El sistema de instancias y de procedimiento escrito sólo reconoce la excepción de los juicios orales los que se autorizan en los casos que el procesado opte por esa forma de juzgamiento.

La instrucción si bien se encuentra deferida a los jueces que tienen sus despachos en el distrito cabeza del Departamento respectivo, se inicia y termina en casi todos los casos por las policías locales, sin el contralor ni la vigilancia de las partes esenciales del juicio o sean el acusador público y el defensor. Es exacto que los sumarios se instruyen en algunos casos por los jueces y lo es también que todas las actuaciones de prevención se remiten a los magistrados los que disponen ratificaciones y ampliaciones. Es también cierto que ante el juzgado intervienen fiscales y defensores pero todo esto no modifica la situación real del mayor número de casos en los cuales las policías locales tienen a su cargo la verdadera instrucción y la suerte del imputado.

Para que los jueces pudieran hacer personalmente el trabajo de instruir los sumarios, el número de éstos hubiera debido elevarse de manera considerable y hubiese sido preciso distribuirlos en todos los distritos, creando uno para los menos poblados y extensos y mayor número en los demás.



El desarrollo de ese programa hubiera exigido por lo menos la creación de ciento veinte jueces de instrucción dentro del territorio provincial donde no se cuenta hoy más que con quince distribuidos en los seis departamentos judiciales y en la siguiente forma: Capital: cinco; Centro: tres; Sud: dos; Norte: dos; Costa Sud: dos y Sud Oeste: uno. Esos jueces en la actualidad, son no sólo de instrucción sino también de sentencia.

Tampoco resulta muy pródiga la Provincia con los tribunales de segunda instancia, por cuanto en la especialidad criminal sólo existen dos Cámaras, las de La Plata y Mercedes. En los cuatro departamentos restantes las Cámaras de Apelación que tienen a su cargo los asuntos civiles y comerciales, son las que intervienen en los procesos.

La demora en la substanciación de las causas y los graves daños que se producen como consecuencia de la lentitud en las soluciones, se deben a diferentes factores y entre ellos pueden anotarse como principales, la insuficiencia de magistrados y el sistema procesal.

El procedimiento adoptado en la Provincia desde la época de su organización, no es por cierto el que se propusieron dar a Buenos Aires, los autores de su ley fundamental.

La Constitución de 1873 tenía en su artículo 14 una promesa terminante: se asegura para siempre a todos, decía, el juicio por jurados.

Los convencionales de 1883 que actuaron como se sabe hasta 1889 pudieron comprobar que a pesar del tiempo transcurrido, no se había hecho nada para cumplir con la afirmación del estatuto en vigor, pero no obstante eso, se mantuvo el concepto cambiándose el artículo 14 por otro que llevó el número 15 y que decía: mientras no se establezca el juicio por jurados la Legislatura podrá dictar la ley de procedimientos en materia criminal y correccional.

Ese precepto ha sido suprimido por la Convención de 1934 la cual ha dejado la organización de la justicia en manos de la Legislatura.

En el seno de esta última Convención reformadora, se expusieron diversos criterios cuando se discutió la organización de la justicia. En la sesión celebrada el 20 de noviembre de 1934, el diputado convencional doctor Ojea propuso un artículo nuevo



en reemplazo del 180 de la Constitución entonces en vigor, por el cual se establecía que la Legislatura debía dictar las leyes de procedimiento tanto en la materia civil y comercial como en la penal y correccional instituyendo para el juzgamiento de las causas tribunales colegiados compuestos de jueces letrados que resolvieran en única instancia por libre convicción, mediante el procedimiento oral y en recurso en las cuestiones de derecho. El mismo artículo en su parte final entregaba a la Legislatura la determinación de la oportunidad de la instalación de esos tribunales, de la justicia de instrucción letrada y de la policía judiciaria.

El diputado convencional doctor Roncoroni, miembro informante de la Comisión en esa parte del despacho, dijo que aquélla no aceptaba el artículo propuesto, aunque individualmente sus miembros eran partidarios del juicio oral. Y agregó que el mismo debe ser establecido en la ley y no en la Constitución, porque pueden variar las circunstancias y las necesidades en el futuro.

Por su parte el diputado convencional doctor Rodolfo Moreno, informante del despacho en general, hizo las siguientes manifestaciones: «De lo que conviene dejar constancia de una manera bien clara, es que si se rechazara la proposición del señor diputado convencional Ojea, eso no significaría, en manera alguna, que la Comisión ha entendido que el sistema oral y público para los juicios sea inconveniente, ni que la Legislatura no pueda aplicarlo, dictando la ley respectiva. Como ha dicho el señor diputado convencional doctor Roncoroni, muchos de los miembros de la Comisión, no me atrevo a decir todos, porque no he conversado individualmente con cada uno, somos partidarios del juicio oral, como lo hemos sostenido repetidas veces; pero creemos que no es esa una materia de la Constitución, sino que su implantación debe dejarse exclusivamente a la ley.

«En materia de organización de tribunales, nosotros hemos sostenido que la Constitución debe contener normas generales, que permitan a la Legislatura dictar las leyes más convenientes y oportunas, y si hace un ensayo que no dé resultado en la práctica, pueda rectificarlo con una nueva ley. No queremos dejar impresas en la Constitución cláusulas definitivas sobre

una institución que si no diera resultado, la Legislatura no estaría en condiciones de rectificar.

«Permitaseme recordar, al respecto, lo ocurrido bajo el imperio de la Constitución en vigor sobre remoción de los concejales municipales en que se aplicó el sistema de la acusación ante jurados populares, el que puesto en práctica se ejercitó y dió un resultado totalmente inconveniente —que no voy a examinar— de tal manera que, la Legislatura de Buenos Aires tuvo que crear una traba, exigiendo a los acusadores un depósito en efectivo, de diez mil pesos, para impedir, precisamente, el movimiento de la ley. La institución que en la ley fundamental se había querido asegurar, fué en el hecho suprimida por una ley de la Legislatura. Si se hubiese, en cambio, establecido en la Constitución que la Legislatura tomaría las medidas que creyera oportunas a los efectos de establecer en qué forma se removerían los municipales, y si se hubiera establecido el jurado, en vista de que no daba resultado, la Legislatura hubiera tenido en sus manos la manera de transformar el sistema.

«Es con ese y con muchos otros antecedentes que hemos tenido en cuenta y por la observación del fracaso posible de la institución, que no podemos en estos momentos lanzarnos a improvisaciones o ensayos que puedan ser inconvenientes; y es de todo punto necesario que quede perfectamente establecido que el hecho de votarse en contra de la proposición del señor diputado convencional Ojea, como lo haré, por mi parte, no significa que mañana la Legislatura no pueda o no deba establecer el juicio oral. En este momento eso es, según todas las circunstancias lo presentan, lo más conveniente y lo más necesario; pero no podemos estar seguros de ello que es sólo una impresión, porque ni siquiera se ha puesto en ejercicio en la Capital, que tenemos al lado y que nos sirve de ejemplo para muchas cosas. Con nuestro sistema, todo está previsto, todo es posible; el ensayo debe hacerse, y si es bueno, lo mantendremos en los hechos y si es inconveniente, lo modificaremos, y así acentuaríamos el concepto que hemos tenido los miembros de la mayoría de la Comisión, aconsejando un proyecto de despacho a la Convención constituyente».

La proposición discutida no se votó en la sesión en que fuera planteada por falta de número, considerándose en defi-



nitiva en la reunión del siguiente día, o sea el 21 de noviembre de 1934.

Al someterse de nuevo el asunto, el autor de la proposición, doctor Ojea, dijo: «En la sesión anterior, con referencia a este artículo 180, el miembro de la Comisión especial doctor Roncoroni y el miembro de la Comisión central doctor Moreno, han establecido de una manera categórica que la discrepancia que existe con el proyecto que he presentado, radica en la circunstancia que para la mayoría las reglas sentadas deben quedar libradas a la Legislatura y el que habla entiende que es menester fijar esos preceptos en la carta fundamental.

«Pero el doctor Moreno agregó, y esto es indispensable que quede consignado en el debate, que era de necesidad y de urgencia perentorias la instalación del sistema de procesamiento por medio de la justicia oral en la provincia de Buenos Aires.

«Si la Convención que va a votar ahora esta materia, resolviera inclinarse por la opinión de la mayoría, hago votos fervientes por que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires de 1935 incorpore, como un honor para su legislación, y en el más breve tiempo posible, este medio de juzgamiento que asegura la verdad y rapidez del fallo».

Estas palabras dieron lugar a otras del doctor Roncoroni, quien se expresó en los siguientes términos: «Como algunos de los señores convencionales no han escuchado los fundamentos que di en la sesión anterior por haberse retirado, quiero concretarlos en pocas palabras, para fijar el pensamiento de la Comisión. Esta mantiene su despacho, es decir, el artículo tal como está redactado y no acepta el que propone el señor convencional Ojea; sin que ello importe de ninguna manera sentar un precedente en contra del juicio oral, de la justicia de instrucción y de la policía judicial. La Comisión entiende que estas instituciones deben ser creadas por ley y no ser establecidas en la Constitución».

Después de este cambio de ideas, se puso a votación el artículo nuevo y se rechazó.

Hemos recordado el debate de la Asamblea Constituyente, no sólo porque en el decreto del Poder Ejecutivo del 5 de





Abril del corriente año — en el cual se designa esta Comisión de Reformas— se alude al mismo, sino porque aquél refleja el espíritu de la Convención, la cual resuelve que la organización judicial debe ser cambiada y que a la Legislatura corresponderá verificar la reforma con amplias facultades, no indicándose un sistema en la carta misma, pero dando una opinión respecto a la mejor orientación en el momento presente.

El Poder Ejecutivo ha recogido la sugestión en el recordado decreto, correspondiendo a esta Comisión concretar aquellos principios en el proyecto correspondiente.

—

La transformación del sistema requiere un cambio completo en la organización judicial.

La justicia actual se maneja: con instrucción policial, procedimiento escrito y juzgamiento en varias instancias.

Se trata ahora de establecer: La instrucción judicial, el juicio oral y público y la instancia única.

Para llegar a estas finalidades se requiere crear los tribunales destinados a juzgar y sentenciar, organizar la instrucción y dar normas adecuadas para el Ministerio Fiscal.

Diferentes problemas de carácter doctrinario y práctico se han presentado a nuestra consideración, habiéndose procurado para las soluciones, consultar unos y otros aspectos. Un proyecto puramente teórico que no consulte los antecedentes, los hechos, las modalidades y las posibilidades está destinado o a no sancionarse o a chocar con innumerables dificultades en su aplicación. Hemos tomado, por eso, los hechos como se presentan y hemos tenido en consideración los recursos con que puede contar la Provincia para ser destinados a la nueva organización judicial. Dejamos bien claramente fijados estos puntos de vista para defendernos de posibles observaciones puramente doctrinarias. Cuando se pueden proyectar organismos ideales, todos los adelantos y perfecciones pueden incorporarse, pero cuando se trata de poner en movimiento



leyes, es preciso —sin perder de vista todos los aspectos enunciados por los publicistas y auspiciados por los organismos científicos, considerar lo que es posible hacer para el Estado llamado a poner en práctica la reforma.

Con los elementos y recursos, que tiene en este momento la Provincia no se podría ni siquiera ensayar el cambio de sistema, es decir, que si debiéramos limitarnos a tomar lo que hoy se tiene y adaptarlo al nuevo régimen, nada podríamos hacer.

El número de magistrados que mantiene la ley de Presupuesto para este año de 1935, revela de una manera inequívoca la exactitud de nuestra observación.

Para instrucción y sentencia, como lo hemos recordado al principio, se cuenta con quince Jueces distribuidos en los seis departamentos. Cada juzgado tiene dos Secretarios o sea en conjunto, treinta. Las Cámaras en lo Criminal son solamente dos, la tercera de La Plata y la segunda de Mercedes, cada una con un Secretario, estando en los departamentos del Norte, Sud, Costa Sud y Sud Oeste, a cargo de los juicios criminales, las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial.

En el Ministerio Fiscal se percibe la misma insuficiencia.

En el Departamento de la Capital hay un Fiscal de Cámaras que atiende a los tres Tribunales de Apelación y que dictamina, por tanto, en los asuntos de todos los fueros; y tres Agentes Fiscales que actúan en primera instancia.

En el Departamento del Centro, se cuenta sólo con un Agente Fiscal para todos los fueros e instancias y situación idéntica a esta es la que existe en los otros cuatro departamentos judiciales.

La primera cuestión, por tanto, que ha debido presentarse a nuestra consideración, es la de saber si debemos aconsejar o no la reforma de la división departamental de la Provincia. Se presenta la misma porque es evidente la necesidad de instalar en cada departamento un Tribunal que debe tener además un Fiscal o más, según la magnitud del trabajo que ha de corresponderle.

Si debiéramos tener en cuenta tan sólo el factor teórico, es posible que la solución más favorable hubiera sido la de



cambiar las divisiones actuales. Con menos departamentos judiciales podrían proyectarse menos Tribunales de la jurisdicción criminal, que si se mantuviera la presente división en los seis, hoy existentes. Se podría observar en efecto, que si en cuatro departamentos los Tribunales de Apelación para lo Civil y Comercial, bastan también para la jurisdicción criminal, con proporcionar dos más para cada fuero, con una división nueva, que refundiese los actuales, podría llegarse a un buen resultado.

Después de pesar los diferentes factores nos hemos decidido por el mantenimiento de la división actual, encontrando que la economía que podría obtenerse con las refundiciones no compensaría con su ventaja, los inconvenientes de todo género que deberían afrontarse.

La organización judicial de la Provincia, debe obedecer a un sistema de descentralización y no encontrarse concentrada en un sólo punto. La Constitución, que crea una Suprema Corte única con asiento en la Capital (artículos 4° y 148) dice en el artículo 154, que la Legislatura establecerá Cámaras de Apelación y Tribunales o Jueces permanentes en la ciudad de La Plata, determinando los límites de su jurisdicción territorial y las materias de su competencia en su fuero respectivo. En el resto de la Provincia los establecerá permanentes o viajeros, organizando los distritos judiciales que considere convenientes.

El principio constitucional, es por tanto, que deben existir distritos judiciales o sea departamentos como hoy se denominan, correspondiendo a la Legislatura su creación.

El número de esos distritos deberá aumentar y no disminuir, desde que la población de la Provincia crece continuamente, en sus ciudades y en su campaña, formándose centros nuevos y presentándose problemas que los gobiernos deben contemplar. La Legislatura ha ido creando paulatinamente esos departamentos, a medida que las necesidades los imponían y respondiendo a movimientos de opinión que han partido desde las ciudades del interior, hacia la Capital. Y es así, como a las primeras divisiones con asiento en la Capital, Mercedes, Dolores y San Nicolás, han sucedido respectivamente las que tienen sede en Bahía Blanca y Azul. Los últi-



mos departamentos creados de manera incompleta o sea con Juzgados, pero sin Cámaras, se han integrado con la instalación de los Tribunales de Apelación.

Esta misma tendencia se percibe, dentro de la Provincia en el orden federal, habiéndose habilitado juzgados en Mercedes y Bahía Blanca, funcionando también una Cámara en esta última ciudad, además de la que existe en La Plata.

La reducción de departamentos, significaría marchar contra la corriente, destruir organizaciones ya hechas y quitar a las ciudades cabezas actuales de distritos judiciales, lo que consideran a justo título, una conquista.

La división departamental se encuentra establecida en todos los fueros, de manera que un cambio en la jurisdicción criminal debiera, o imponer uno análogo en lo Civil y Comercial o producir una situación de discordancia, con una división diferente para cada materia. Lo primero provocaría una justa y airada protesta; lo segundo traería como consecuencia la desarmonía y la confusión.

Debemos entonces proyectar la instalación de un Tribunal del Crimen en cada uno de los seis departamentos actuales, conservando la división existente. Cada uno de esos Tribunales deberá tener también organizado su Ministerio Fiscal propio.

Los Tribunales de Apelación, tienen actualmente en la Provincia, tres miembros y pueden dictar sentencia con dos únicamente, conforme a la ley de 21 de julio de 1914.

De acuerdo con esta tradición, consideramos que bastará que el Tribunal de juzgamiento se componga de tres miembros, debiendo manejarse de acuerdo con los preceptos del Código de Procedimientos.

En La Plata dado el trabajo existente, los distritos que forman el Departamento, entre los cuales se cuentan todos los que rodean la Capital Federal y que forman parte de la aglomeración bonaerense, consideramos que será necesario crear dos o más Tribunales. En el proyecto solo se establece que habrá uno, por lo menos, en cada departamento, debiendo ser la ley de presupuesto la que fije los números definitivos. El aumento que pudiera hacerse en cualquier momento de acuerdo con las nuevas necesidades, no alteraría la estructura de la nueva organización.



Los actuales departamentos judiciales agrupan diferentes números de partidos o distritos. Quizás con un examen detenido de las poblaciones, los medios de comunicación y las distancias entre cada uno de ellos y la de estos al centro, hubiera surgido la conveniencia de alterar algunas incorporaciones, quitando y dando respectivamente, distritos a los departamentos.

Hemos tomado sin embargo, las divisiones actuales como hechos, dado lo expuesto antes, sobre los diferentes fueros y teniendo en consideración que esas divisiones se han discutido a través de intereses y de necesidades que la Legislatura ha contemplado al establecerlas.

La Cámara o Tribunal del Crimen se encuentra destinada al juicio en instancia única. La instrucción debe ser hecha por otros funcionarios, que entreguen el material a quien debe pronunciar el veredicto.

La organización de las autoridades destinadas a instruir, constituye uno de los problemas más serios de la reforma que se proyecta.

Es evidente, que lo ideal, sería crear la justicia de instrucción letrada en todo el territorio, con jueces distribuidos en las ciudades cabezas de distrito y en los centros de población importantes del mismo. Pero una solución semejante no sería posible por motivos financieros. Llamamos la atención sobre este punto para que quienes sostienen la justicia de instrucción letrada, no supongan que nosotros al proponer un sistema transactivo, estamos en desacuerdo con sus principios. Lo que ocurre es que no sería factible establecerla con la amplitud que, sin duda, deseáramos.

En Buenos Aires, Provincia, hay que tener en cuenta no sólo la población, sino la extensión. Si proyectáramos una legislación para una ciudad, los términos del problema serían diferentes, desde que la población agrupada y no repartida permite otras soluciones.

La instalación de un Juzgado en un distrito lejano de la capital y extenso, no se justificaría, si se tomasen como base las cifras estadísticas de la delincuencia que son por cierto in-



completas; pero si tuviéramos en cuenta sólo la extensión y las distancias entre los centros poblados del partido mismo, podríamos encontrar que un Juez sólo no bastaría. Además como los delitos no tienen lugar con método y a veces se perpetran varios en un mismo distrito y en otras oportunidades transcurre el tiempo, sin que se consumen, los Jueces de cada localidad podrían tener épocas de verdadero descanso y otras en las cuales no pudieran llenar su misión de instructores. Todo esto planteando la cuestión en hipótesis, ya que la dificultad financiera estaría siempre gravitando.

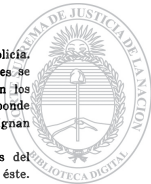
La entrega de la instrucción a la policía de seguridad, dependiente del Poder Ejecutivo, marcaría un retroceso. Si tal cosa se hiciera, la justicia estaría sujeta a las administraciones y si bien con el cambio en el sistema de juzgamiento se podría ganar en la rapidez de la substanciación, no se obtendrían resultados auspiciosos en cuanto al prestigio de las instituciones.

El principio que cuenta en esta materia con el apoyo de la ciencia jurídica y con el auspicio de los técnicos, es el que ofrece mayores garantías a la sociedad y a los individuos y que podría expresarse en concreto diciendo: justicia de instrucción letrada, con policía propia y la mayor descentralización posible.

De esta manera, la función de instruir los procesos, que es de carácter profesional, se entregaría a funcionarios judiciales, capacitados por su título para el cargo, se les daría toda la independencia necesaria y al colocar a sus órdenes una policía judiciaria se apartaría a la administración de toda ingerencia en los procesos. La descentralización, que impondría la creación de juzgados en los centros de población con jurisdicción en la campaña vecina, pondría al magistrado en contacto directo e inmediato con las causas y los sujetos.

Sin declinar del principio que significa en este momento y en esta clase de asuntos, la aspiración, adoptamos un procedimiento, que si bien no llena todos nuestros propósitos, avanza considerablemente sobre lo que hoy tenemos y es factible de realización. Hemos llegado a ese resultado haciéndonos cargo de las posibilidades, de los gastos que podría afrontar la Provincia y de las necesidades sentidas.

En el sistema vigente y como lo hemos hecho notar antes, la instrucción está teóricamente en manos del juez, que lo es



a la vez de sentencia, y prácticamente en poder de la policía. Esta última depende del Poder Ejecutivo, sus componentes se nombran y se remueven al arbitrio del mismo y si bien los jueces dictan órdenes, el cumplimiento de estas corresponde a las personas que los funcionarios administrativos designan pudiendo cambiarlos.

Los sumarios se instruyen por empleados dependientes del Poder Ejecutivo con aviso al juez y por delegación de éste. Pero los jueces, aun cuando lo quisieran no podrían instruir los sumarios, dado su número exiguo, la cantidad de causas y la simultaneidad de hechos en lugares distantes, unos de otros.

Proponemos, para separar la administración, de la justicia y rodear a ésta y a los ciudadanos del mayor número de garantías, la creación de una magistratura de instrucción a cargo de jueces letrados con asiento en las ciudades cabeza de departamento y de funcionarios auxiliares que deben tener título de competencia para la función, con sede en las ciudades y centros importantes de población. Esos funcionarios reemplazarían a los actuales comisarios de policía, tendrían estabilidad y actuarían con independencia.

La policía de seguridad prestaría por su parte el concurso que fuera necesario a esos instructores.

Con el actual sistema, el Comisario de Policía depende del Poder Ejecutivo, a través del Jefe de la repartición y cuando instruye sumarios del Juez respectivo. Entre las dos dependencias, siempre domina la administrativa desde que los jueces ni nombran ni remueven a los Comisarios, mientras que el Poder Ejecutivo tiene facultades para una y otra cosa.

El Comisario desempeña dos funciones desde que actúa, como empleado de la administración y como auxiliar de la justicia. Esas dos funciones que debieran estar terminantemente delimitadas, se confunden porque el empleado obedece en primer lugar al poder que tiene sobre él mayor fuerza o sea el Ejecutivo. Creando el Comisario Instructor como funcionario especial y dándole estabilidad, se contará con una garantía segura en la instrucción y ajena a los vaivenes de la política local y a las influencias de cualquier índole.

Los Comisarios Instructores deberán tener la competencia necesaria para el ejercicio de la función. Teniendo en cuenta los conocimientos que se precisan para desempeñar el cargo,

consideramos que deberán tener título de Doctor en derecho, Abogado, Escribano o Procurador Universitario.

Para establecer las formas de nombramiento y remoción de los empleados, tanto los que corresponden exclusivamente a los tribunales, jueces, ministerio fiscal y defensoría de menores, como los que se destinan a la instrucción como auxiliares, hemos debido de tener en cuenta los preceptos de la Constitución. La reforma de 1934 introdujo en esta materia algunas modificaciones que se dirigen a los tres poderes. En diferentes partes de la Carta Fundamental y con referencia a Cámaras Legislativas, a Poder Ejecutivo, a Tribunales y a Jueces, se prescriben formas para el nombramiento de funcionarios existiendo además un precepto nuevo, el artículo 40, según el cual los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea la Constitución, serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

Debido a estos preceptos de fondo, hemos debido proyectar formas diferentes para los diversos funcionarios.

Los miembros del Tribunal Colegiado destinado a juzgar y sentenciar, lo mismo que los Jueces de Instrucción, están sujetos a lo que prescribe el artículo 165 de la Constitución, debiendo por tanto ser nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La remoción de unos y otros sólo podrá ser hecha por un Jurado, de acuerdo con lo establecido por el artículo 172 de la misma Carta Fundamental y conforme a la ley que lo reglamente.

Los empleados del Tribunal o Cámara del Crimen, deben ser designados por el mismo Tribunal conforme a lo establecido por el artículo 155 de la Constitución. En cuanto a los empleados dependientes de los Jueces de Instrucción y de los Fiscales, los nombramientos deben hacerse por la Suprema Corte a propuesta de unos y otros, pues así lo establece el inciso 5° del artículo 149 de la Constitución.

Los Defensores de Pobres, según el artículo 180 de la Constitución forman parte del Ministerio Público, lo mismo que los Asesores de Menores y Defensores de Ausentes. La mencionada Carta Fundamental en el citado artículo 180 se refiere a defensores de pobres y ausentes, lo que no significa que defender a pobres y ausentes, sea la misma cosa. Los defensores de pobres





actúan en los juicios criminales y los de ausentes en los asuntos civiles.

En el Presupuesto vigente, los defensores que mantiene la ley, son de pobres y ausentes, pero en otras épocas, esos cargos han estado divididos. Como esa separación podría producirse de nuevo, el proyecto considera a esas funciones como diferentes, lo que no implica la necesidad de nuevas creaciones, sino una previsión para el caso que pudieran efectuarse más adelante.

Los funcionarios del Ministerio Público a que debe referirse la Ley Orgánica de la Justicia en lo Criminal, deben ser únicamente los Fiscales, Agentes Fiscales y Defensores de pobres. Los Asesores de Menores y Defensores de Ausentes forman parte de otro organismo judicial y sólo cabe tenerlos en consideración cuando se trate de reemplazos.

La Constitución no establece cómo se deben nombrar los miembros del Ministerio Público, o sea en la jurisdicción criminal, los fiscales, agentes fiscales y defensores de pobres. Dice, sin embargo, en el artículo 180 qué condiciones deben reunir para ser designados y en cuanto a la destitución los somete al Jurado, lo mismo que a los camaristas y jueces. El texto del artículo 172 es categórico al respecto.

Pensamos entonces que el nombramiento de los miembros del Ministerio Público debe corresponder al Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, procediéndose como hasta ahora y dada la autorización contenida en el artículo 179 de la Constitución. Tenemos además en cuenta que los camaristas y jueces se nombran de esa manera y con tales requisitos. La Legislatura con respecto a los miembros del Ministerio Público, se encuentra facultada para dar a esos funcionarios inamovilidad y sus nombramientos se verifican como los de los jueces. Aceptamos esa situación existente proyectando para los miembros del Ministerio Público, la misma situación que para las magistrados judiciales.

La ley debe prever los casos de impedimento de funcionarios y el reemplazo de los mismos para que en ningún supuesto puedan faltar, ni el Juez, ni el Tribunal, ni los funcionarios del Ministerio Público y los auxiliares.



Al Código de Procedimientos corresponderá la determinación de las causas del impedimento, las formas para llegar a las sustituciones, el juicio de los motivos y los demás detalles.

Las previsiones de la Ley Orgánica deben referirse a: Tribunales, Jueces, Fiscales, Agentes Fiscales, Defensores de pobres y Funcionarios auxiliares.

Las reglas adoptadas son análogas a las vigentes. Todo miembro de Tribunal, Juez o componente del Ministerio Público debe ser sustituido en primer término, por quien desempeñe iguales funciones y en subsidio por Jueces o funcionarios de la jurisdicción civil. Cuando no se pueda formar Tribunal en un Departamento y cuando todos los Jueces de Instrucción estuviesen impedidos, el proceso en cuestión será enviado a otro Departamento donde regirán las mismas reglas generales para los reemplazos.

Tratándose de los miembros del Ministerio Público, las sustituciones deben verificarse entre los mismos, en la jurisdicción criminal primero y en el orden civil, subsidiariamente.

Cuando se agotaren los Defensores de Pobres, que son funcionarios del Ministerio Público, el Tribunal designará un abogado de la matrícula. Para imponer la gratuidad del servicio en el caso que debiera requerirse, basta recordar las obligaciones que contraen los abogados al prestar juramento cuando se inscriben en la matrícula a los efectos del ejercicio profesional.

Para los Comisarios Instructores, hemos proyectado un sistema especial de remoción a fin de darles estabilidad. Consideramos desde luego que debiendo ser esos funcionarios la base de la instrucción, si se dejara su nombramiento y remoción en manos del Poder Ejecutivo, se habría entregado aquella a la policía de seguridad o sea a la autoridad administrativa. Esos funcionarios no son tampoco ni empleados de la Suprema Corte, ni de las Cámaras, ni de los Jueces, ni de los Fiscales. Son auxiliares de la justicia para cuya designación y separación la Legislatura puede resolver lo que encuentre oportuno. En efecto, el artículo 179 de la Constitución trae un precepto que modifica la regla del



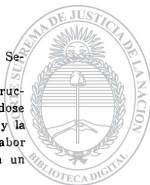
artículo 40, diciendo: «La ley determinará el modo y forma cómo deben ser nombrados y removidos y la duración del período de los demás funcionarios que intervengan en los juicios». Con esa autorización, la Legislatura puede para los demás funcionarios que intervengan en los juicios o sea aquéllos que no tienen formas especiales de nombramiento y separación, dar las normas respectivas. Proyectamos así, que a tales funcionarios los nombre el Poder Ejecutivo, pero les damos estabilidad y proponemos garantías para su separación, dando intervención en la misma al Tribunal de la jurisdicción correspondiente. De acuerdo con las cláusulas del proyecto, un Comisario Instructor, sólo puede destituirse por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Tribunal o a pedido de este último a aquel Poder. Cuando el Tribunal solicita la exoneración, aquella debe decretarse. Para que proceda el requerimiento se necesita unanimidad de votos, mientras que para prestar el acuerdo basta con una mayoría.

A fin de que solicitada por el Tribunal una destitución no sea posible que el Poder Ejecutivo la detenga y el funcionario siga actuando, el Tribunal queda autorizado para suspender al empleado objeto de la grave medida.

El proyecto se ocupa también con el mismo criterio señalado en las disposiciones constitucionales de las cuestiones de disciplina, de las licencias y los reemplazos. Se ha tenido en cuenta al redactar los artículos, que podrán ser objeto de reglamentaciones, el mejor servicio público y la imposibilidad de las concesiones de largas licencias que perjudican la labor, cuando no se hacen sustituciones.

Los Secretarios de las Cámaras actuales deben tener título de Abogado. Consideramos que dadas las tareas que deben desempeñar esos funcionarios en los Tribunales del Crimen a crearse, conviene mantener para los mismos la exigencia de tal título. En cuanto a los Secretarios de los Jueces de Instrucción, mantenemos igualmente el requisito de las profesiones que se requieren hoy para ser Secretario de los Jueces del Crimen, los que deben tener diploma de Abogado o Escribano.

Debe hacerse notar con referencia a esos funcionarios, que el proyecto en esta parte, puede importar reducción de los



gastos si se proporciona a cada Juez de Instrucción un Secretario y no dos, como actualmente tienen.

Hoy los Jueces del Crimen, que lo son a la vez de Instrucción, tienen a su cargo el sumario y el plenario. Sacándose de sus manos este último puesto que el juicio, la prueba y la sentencia corresponderá a los Tribunales colegiados, la labor de esos Jueces se verá simplificada y podrán actuar con un Secretario cada uno.

Por este concepto solamente se suprimirían quince Secretarios de juzgado remunerados con seiscientos ochenta pesos mensuales cada uno, lo que daría un total de diez mil ochocientos pesos por mes, o sea ciento veinte y dos mil cuatrocientos pesos anuales. Ese recurso desde luego serviría para compensar los demás aumentos necesarios.

Hacemos notar además, que los quince actuales jueces del crimen deberán ser reemplazados por ocho jueces de instrucción o sean tres en la Capital y uno en cada uno de los otros cinco Departamentos quedando siete para ser distribuidos en los Tribunales a crearse. Estos Tribunales exigen en nuestra opinión y por lo menos quince camaristas o miembros más de los que hoy se tienen, desde que será preciso crear un tribunal más en La Plata y uno en cada uno de los siguientes Departamentos: Norte, Sud, Costa Sud y Sud Oeste. El Departamento del Centro tiene Tribunal.

Anotamos estas circunstancias para que se perciba todo lo factible que es prácticamente la solución que aconsejamos.

Los Comisarios Instructores deberán reemplazarse entre sí. Los casos en que proceda la sustitución y la manera de efectuarla deberán ser establecidas por el Código de Procedimientos.

El proyecto no indica la manera de sustituir los Secretarios de los Juzgados y de los Tribunales porque esos funcionarios dependen del Poder Judicial, debiendo por tanto, las acordadas de la Suprema Corte o el Tribunal prescribir todo lo referente a los mismos y a los demás empleados. En la ley sólo hemos incluido preceptos de carácter general que tienden a la mayor eficacia de la función y sin invadir las atribuciones del Poder Judicial.



La ley orgánica debe crear el Tribunal y dar las reglas precisas para su desenvolvimiento, correspondiendo al Código procesal la fijación de las formas que han de emplearse en el juzgamiento de los imputados. De acuerdo con esos conceptos nos limitamos a decir en el artículo 11 que el Tribunal se crea con dos objetos: juzgar en juicio oral y público a las personas acusadas y entender en los recursos de apelación que se autoricen contra las resoluciones de los jueces de instrucción.

Las formas del juicio y los casos en que procederán los recursos serán determinados por el Código.

La ley de 21 de julio de 1914 sobre funcionamiento de las Cámaras de Apelación contiene algunos preceptos que deben tenerse en cuenta. Esa ley tuvo por objeto apresurar el despacho de los asuntos pendientes de resolución en las Cámaras de los Tribunales y para ello se autorizó el pronunciamiento con la concurrencia de sólo dos jueces y se dictaron medidas de fiscalización para el trabajo de los miembros de los cuerpos colegiados de la justicia de segunda instancia.

El mensaje del Poder Ejecutivo de 27 de mayo de 1914 dió los fundamentos, los que fueron ampliados por el Ministro de Gobierno en la sesión del Senado del 30 de junio de aquel año.

Compartiendo los propósitos enunciados entonces, sostenemos que para la rapidez de la sustanciación es preciso que la ley orgánica fije unas cuantas bases de las cuales los magistrados no pueden apartarse.

Proyectamos:

a) La supresión del feriado judicial considerando que no es posible mantener a los inculpadados de delito con sus procesos detenidos por el descanso del Tribunal. El feriado explicable cuando regían las leyes de Partida, no tiene hoy justificación. Los magistrados por lo demás, están autorizados para solicitar licencias en los casos de necesidad.

b) Medidas de fiscalización análogas a las contenidas en la ley de 1914, las que si se cumplen aseguran el regular funcionamiento de la justicia.

c) Autorización al Tribunal para dictar su reglamento, sin perjuicio del sometimiento a la ley y a las disposiciones que sancione la Corte Suprema de acuerdo con sus facultades constitucionales.



d) El quórum de tres miembros o sea de todo el Tribunal para el juicio oral y el veredicto, y el de dos para pronunciarse en las apelaciones de los autos recurribles que dicten los jueces de instrucción. Para esto último mantenemos la ley de 1914, mientras que para el juicio oral y el veredicto, o sea lo esencial del juicio requerimos la presencia total. Hoy el procesado es siempre juzgado por tres jueces por lo menos, o sea el de primera instancia y dos de segunda. Con la exigencia proyectada se mantendría la garantía pues se contaría siempre con tres, tanto para los casos de apelación como para el juicio oral.

Como los miembros del Tribunal deben tener la mayor independencia, ajena ésta a vínculos personales, proyectamos una cláusula análoga a la que existe en otras legislaciones y que impide a ciertos parientes formar parte de la misma Cámara judicial.

El juicio oral, con su discusión pública, en la cual intervienen partes, letrados, peritos, apoderados y concurrentes, que pueden ser numerosos, tiene que ser cuidado en su desarrollo y en su pronunciamiento. Si los juicios se hacen teatrales, si las partes se ingenian para presentar los procesos bajo aspectos inconvenientes, si abusan de la sátira o de los golpes efectistas, si faltan a la consideración a los magistrados, a los testigos o a los demás intervinientes, el sistema puede desacreditarse y lo que se pensó un progreso transformase en un retroceso. Todo lo que se haga para dar a estos juicios una gran seriedad, será provechoso y contribuirá a crear el respeto público. En algunas partes, los juicios orales han servido para la exhibición de escándalos y abusos de ingenio, que han desprestigiado la institución.

Los Tribunales encargados de cuidar el decoro de la justicia deben estar entonces para el éxito de estas formas nuevas, armados de facultades que les permitan hacerlas respetar. A esto tienden las autorizaciones para corregir disciplinariamente. Estas medidas deben usarse no sólo para cuidar el desarrollo de los juicios, sino el sistema mismo, reprimiendo a los que quieran perturbarlo, con recursos, medidas y argucias que le quiten eficacia.



La publicidad en los juicios es la regla. Las audiencias deben celebrarse a puertas abiertas, para que cuenten con la presencia de quien quiera presenciarlas y para que la opinión popular y periodística forme ambiente a los magistrados, a la dirección que impriman a los juicios y a sus resoluciones.

Sólo por motivos excepcionales de moral y para evitar escándalos siempre perjudiciales, puede celebrarse una audiencia sin presencia del público que desea concurrir.

El Código Penal tiene disposiciones que tienden a cuidar el decoro de los magistrados y que castigan a quienes lo atacan, como autores del delito de desacato.

Además, esta ley contiene preceptos relativos a correcciones disciplinarias, expresando cuándo deben aplicarse. Las partes y todos los que intervinieren en los juicios y los presenciaren deben conocer esas disposiciones. Proponemos, por eso, se coloquen los artículos respectivos en las salas de audiencia en forma visible y además que se advierta a partes y concurrentes al iniciarse las audiencias, de esas disposiciones.

La ley orgánica de la justicia en materia criminal debe dilucidar también lo relativo a jurisdicción de los magistrados. En la Provincia ha existido una división entre los jueces del crimen y correccionales y en el Departamento de la Capital, se ha contado anteriormente con un Juez para las causas correccionales exclusivamente. Con posterioridad, los jueces letrados tenían a su cargo las dos materias y se denominaban magistrados en lo criminal y correccional. El Código de Procedimientos de 1906, al ocuparse en el libro sexto de los procedimientos especiales, mencionaba en el artículo 752 del título sobre procedimientos en materia correccional, al Juez correccional.

El Código vigente, en el título II de la sección II, libro V, reglamenta el procedimiento correccional, legislando sobre el asunto en los artículos 432, 433 y 434.

No obstante esos antecedentes, el procedimiento correccional ha desaparecido de la justicia letrada del crimen, aplicándose las reglas del mismo solamente en los juicios de calumnia e injurias con algunas modificaciones.



Los jueces de la jurisdicción criminal se designan en la ley de Presupuesto vigente con el título de jueces del crimen, habiéndose eliminado el aditamento de correccionales. Además, la división entre las Secretarías, que destinaba una a los asuntos criminales y otra a los correccionales ha desaparecido también. Los artículos 432, 433 y 434 del actual Código de Procedimientos, resultan así sin aplicación.

Dos motivos han existido para que se haya producido ese cambio: la sanción del nuevo Código Penal para la Nación y las reformas introducidas en la Ley de Justicia de Paz para la Provincia.

Las leyes penales anteriores a la que nos rige verificaban distinciones entre los diferentes delitos. Así el proyecto del doctor Carlos Tejedor, que rigió como ley en la provincia de Buenos Aires y que sirvió de base al primer Código Penal para la Nación, distinguía entre delitos graves o crímenes y delitos menos graves o simplemente delitos. Los crímenes se castigaban con penas aflictivas y los delitos con penas correccionales. En esa distinción que penetró en la legislación anterior a la vigente se basó la división entre justicia del crimen y justicia correccional.

Esto mismo se pone de manifiesto en el Código de Procedimientos vigente que dice en el artículo 432: el procedimiento correccional se ajustará a las reglas que establece el Código para las causas graves, con las modificaciones que se establecen en dos incisos.

Se consideraban en general causas graves aquellas en que la pena del delito era la de penitenciaría, presidio o muerte. Los demás eran correccionales y así lo establece de manera expresa el artículo 445 del Código de Procedimientos vigente. Para que esa división pudiera mantenerse era preciso que la ley penal, como ocurría con el Código anterior hubiera fijado las sanciones con el viejo criterio, pero esa distinción no se puede conservar hoy, dada la diferente técnica del nuevo estatuto.

En el Código vigente el delito de defraudación por ejemplo, se castiga con una pena que puede variar desde un mes hasta seis años de prisión. Si aplicáramos las anteriores reglas procesales para juzgar al autor de un delito de esa clase, diríamos que le podía corresponder una pena grave o leve, siendo la infracción según su resultado, un crimen o un simple delito.



Con el sistema anterior de clasificación y de penalidad, era fácil, establecer, de acuerdo con la imputación, la jurisdicción a la cual debía corresponder la causa. Con el sistema actual, el monto de la pena, que haría encuadrar el proceso, en una u otra jurisdicción no puede determinarse sino en la sentencia, lo que hace difícil o imposible la división.

Además de la circunstancia de fondo anotada, debemos mencionar el factor local antes recordado y es la sanción de la ley de justicia de paz de 29 de julio de 1926, que en el inciso 2° del artículo 21 atribuye a los jueces de paz el conocimiento de todo asunto correccional en que la pena no exceda de quinientos pesos de multa o de un año de detención, arresto, prisión o servicio militar.

Aun cuando las reformas a esa ley son posteriores a la sanción del Código Penal de fecha 29 de octubre de 1921, se ha conservado la antigua terminología y se mencionan penas suprimidas, como ser: el arresto y el servicio militar y se contiene también la detención que no es un castigo sino una medida de prevención.

Se comprueba con lo expuesto, que la división anterior entre justicia criminal y correccional, no existe para la justicia letrada. Esta juzga aplicando el procedimiento criminal y ciertos casos de delitos reprimidos con penas leves, corresponden a la justicia lega o sea a la de paz.

El decreto dictado por el Poder Ejecutivo el 5 de abril del corriente año instituyendo esta Comisión de reformas, se refiere al procedimiento criminal y correccional seguramente por no apartarse de los términos empleados en la actualidad, pero en el hecho, como ha podido notarse la antigua división, ha desaparecido.

En cuanto a la intervención de los jueces de paz si se toman los preceptos de la ley en su letra, serán muy contadas las causas penales en las cuales les corresponda tomarla.

Agregaremos por fin, que los fallos de los jueces de paz en los asuntos llamados correccionales, son apelables, según el artículo 23 de la ley, ante los jueces del crimen, siendo la resolución dictada por éstos de carácter definitivo.

La aplicación del Código Penal debe ser en nuestra opinión confiada únicamente a los jueces letrados.



Requiere la misma, conocimientos especiales en la ciencia jurídica que no tienen los jueces de paz a quienes no se les puede reclamar nada más que buen criterio. Dada por lo demás la técnica del Código Penal vigente y los pocos casos en que corresponde a los jueces legos intervención en procesos, según la ley en vigor, consideramos que no se recargará de trabajo a los magistrados letrados, encargándolos de intervenir en el juzgamiento de todos los delitos previstos y reprimidos en el Código Penal. Debe observarse también a este respecto, que el Código Penal anterior a la reforma, si bien en la definición del artículo 1° se refiere a delitos y faltas, sólo legisló respecto a los primeros y que el Código vigente, sólo se refiere a delitos. La legislación de faltas que puede ser dictada por el Congreso y también por las Legislaturas, no ha sido objeto ni en la Nación, ni en la Provincia, de preocupación especial. Entendemos que ese vacío debe llenarse y que por separado debe sancionarse una ley sobre faltas, normas generales, jurisdicciones y autoridades que puedan sancionar edictos y ordenanzas con penalidades, fijando además los procedimientos.

A la justicia de paz le correspondería ese aspecto de la represión debiendo excluirse su intervención del juzgamiento conforme a las necesidades impuestas por los hechos.

—

La determinación de los peritos oficiales, su número y sus especialidades deben ser fijadas por la ley de presupuesto, de los delitos previstos y penados por el código.

No sería posible, si la cantidad de casos no lo impusiese, crear cargos especiales de médicos legistas, calígrafos, químicos, armeros, etc., o sea los diversos peritos cuyos conocimientos técnicos se requieren en los juicios criminales.

Como en principio todo funcionario debe prestar al Estado, los servicios que se le requieran, pensamos, que los empleados cualesquiera sea su categoría deben colaborar como peritos cuando sea necesario. Con esto no innovamos, sino que aplicamos principios vigentes en el orden provincial y en el nacional. Y de esa manera, los puestos especiales de peritos, sólo se crearán cuando el número de dictámenes a producirse lo justifique.



El sistema de nueva organización judicial que proponemos, si bien requerirá gastos mayores de personal, aparejará ventajas, aún de orden financiero, que serán percibidas materialmente, una vez que la nueva ley entre en vigor.

La tramitación de los procesos criminales, se resiente hoy por su lentitud.

Si tomamos los términos que señala el Código de Procedimientos para el desenvolvimiento ordinario de una causa, comprobamos que la ley autoriza:

Tres meses para el sumario;

Doce días hábiles para la acusación fiscal;

Doce días hábiles para la defensa, o sea en resumen un mes para fiscal y defensor;

Cuarenta días para la prueba;

Tres días para los alegatos;

Veinte días para la sentencia.

Quiere decir que en un proceso perfecto en el cual los términos se cumplan estrictamente y sin contarse con incidencias, apelaciones, recusaciones, contiendas de competencia o licencias del magistrado, la sentencia en primera instancia no se puede obtener antes de que hayan transcurrido siete meses desde la fecha de la iniciación. Agréguese a esto la apelación y el recurso extraordinario ante la Suprema Corte y tenemos un tiempo corriente que no baja de dos años.

Además debe tenerse en cuenta que los términos cuando son varios los acusados y varios los defensores, se alargan con los traslados individuales.

Ahora bien cuando hay incidencias los procesos se demoran por largo tiempo y a eso se debe que se opere muchas veces la prescripción estando en trámite el juicio.

Mientras dura el proceso, si el acusado no ha sido puesto en libertad provisoria o bajo caución, permanece en la cárcel de detenidos, creando un problema social y proporcionando un gasto al Estado. En las cárceles de detenidos, los procesados no se encuentran sometidos al trabajo, ni a la disciplina de los penales.

Apresurando la tramitación de los asuntos por medio del procedimiento oral y público, suprimiendo las incidencias y dando lugar a que un acusado solucione en breve término su situación, decidiendo la justicia su absolución o su con-



dena y ampliando en forma razonable los casos de libertad provisoria y bajo caución, las cárceles de detenidos pasarán a ser simples depósitos que no tendrán la cantidad considerable de personas que hoy albergan.

La Provincia que cuenta en la actualidad con dos penales, el de Sierra Chica y el de La Plata, tiene ocho cárceles de detenidos o sean las tres de La Plata; (establecimiento de la calle 1; departamento de policía y cárcel anexa de la calle 14) y una en cada uno de los cinco departamentos de campaña. Además tiene en la Capital cárcel para menores procesados y condenados y otra para mujeres en ambas condiciones.

Debe además tenerse en cuenta que en cada comisaría de distrito se alojan procesados mientras dura el sumario de prevención policial.

La disminución de detenidos traerá como consecuencia una reducción de gastos en el mantenimiento de las cárceles y suprimirá esos lugares de ocio donde la larga detención sólo trae resultados inconvenientes. Con una ley procesal que permita la rápida solución de las causas criminales y la terminación por tanto de la incertidumbre que crea el proceso, se hará más justicia y regirán principios más humanos para los acusados y de mayor seguridad para el medio social afectado por el delito.

El proyecto que hemos fundamentado no puede sancionarse sólo. Su complemento indispensable es el código de procedimientos que se acompaña por separado con su correspondiente exposición de motivos.

RODOLFO MORENO, EUSEBIO GÓMEZ.



ENCUESTA





Texto de la nota enviada a los señores Magistrados

La Plata, 15 de abril de 1935.

Señor Juez.....

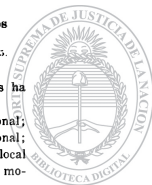
El Poder Ejecutivo por decreto del 5 del corriente nos ha designado para preparar los siguientes trabajos:

- a) Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional;
- b) Organización de la justicia en lo criminal y correccional;
- c) Organización carcelaria, comprendiendo el régimen local de los establecimientos para penados y detenidos, las modificaciones y ampliaciones en ambos y las reformas que se consideren convenientes;
- d) Patronato de liberados;
- e) Menores delinquentes, imputables y no imputables y menores abandonados o que por cualquier causa deban estar a cargo del Estado;
- f) Registro local de reincidencia;
- g) Procedimiento sobre faltas y normas generales respecto a éstas.

El señor Ministro de Gobierno nos ha recomendado la terminación de la labor, a la brevedad posible, con el objeto de presentar los proyectos a la Honorable Legislatura dentro del corriente año.

Hemos iniciado nuestro trabajo y nos proponemos redactar ante todo el Código de Procedimientos y la ley orgánica de la justicia en lo Criminal. Como el Código, deberá implantar el juicio oral y público de acuerdo con el Decreto del Poder Ejecutivo y las opiniones vertidas en la última Convención Constituyente, es indispensable presentar por separado y al mismo tiempo la ley orgánica, desde que el cambio de sistema impondrá la transformación de la estructura actual. Bastará a esos efectos, observar que el procedimiento oral exigirá la separación entre la instrucción y el juicio, requiriéndose transformar no sólo la organización de la justicia sino la del Ministerio Fiscal.

La colaboración de los señores Magistrados, sería para esta Comisión de verdadera importancia. Los que han tenido y tienen oportunidad diaria de penetrarse de las necesida-





des de la justicia bajo el doble aspecto de la seguridad social y las garantías individuales, están en condiciones de aportar opiniones y elementos que difícilmente podrán encontrarse en fuentes más autorizadas.

El problema que debemos resolver es integral, de manera que no sería el caso de formular preguntas, ni de limitar la encuesta a puntos determinados. Dentro de su amplitud sin embargo, nos permitimos anotar algunas cuestiones fundamentales sobre las que sería sumamente interesante tener una opinión. El juicio oral puede implantarse con un jurado, cuya calificación reglamentaría la ley o sin jurado. En el primer caso el jurado se pronuncia sobre los hechos y el magistrado que lo dirige aplica la ley. Bajo otro sistema un tribunal colegiado compuesto de jueces, dirige el juicio y se pronuncia sobre todo, es decir, dicta sentencia.

Cabría también, un sistema c, tativo que permitiera a elección del acusado, el juicio con jurado o sin jurado.

Cualesquiera fuera el sistema a seguirse, punto sobre el cual la opinión sería de todo interés, se impone la instrucción previa. anterior al juicio. Esa instrucción sería conveniente que fuese letrada, pero la extensión de la Provincia, obligaría, a pesar de su reducida población, a crear numerosos juzgados y los recursos de que se dispone no permiten una crecida erogación.

Nos interesaría entonces, conocer la manera de pensar de los magistrados acerca de como podría organizarse prácticamente la instrucción de los procesos para llegarse al juicio oral y público.

El actual Código de Procedimientos autoriza el juicio oral cuando el procesado elige esa forma de juzgamiento de acuerdo con los preceptos reglamentarios de aquel estatuto. Tal circunstancia ha dado lugar a que muchos juicios se hayan sustanciado y terminado usando de esa forma particular, que ahora se desea hacer extensiva a todos los procesos, limitándose la ley a ese solo sistema.

Las observaciones recogidas por los señores Jueces en esos juicios especialmente serían de verdadero interés para esta Comisión.

Sería también interesante conocer el punto de vista judicial acerca de la publicidad del sumario, términos de la

prevención e incomunicación del acusado, y tanto el carácter de las pruebas como su apreciación.

Rogamos, por tanto al señor Juez, quiera tener la deferencia de prestar a la Provincia este nuevo servicio colaborando en la obra de su legislación.

Salúdanlo muy atentamente.

RODOLFO MORENO. EUSEBIO GÓMEZ.





MAGISTRADOS A LOS CUALES SE REMITIO LA NOTA

Suprema Corte de Justicia.

Presidente: Dr. Manuel J. Argañarás.

Vocales: Doctores Ismael Casaux Alsina, Carlos Ocampo,
Enrique Arau y César Ameghino.

Procurador General: Dr. Florencio Palacios Costa.

Miembros de la Cámara 3ª del Departamento de la Capital (La Plata).

Presidente: Dr. Pedro J. Alegre.

Vice » Dr. Gregorio J. Lecot.

Vocal: Dr. Alfredo Ves Losada.

Miembros de la Cámara 2ª del Departamento del Centro (Mercedes).

Presidente: Dr. José N. Figueroa.

Vice » Dr. Angel J. Bregazzi.

Vocal: Dr. Jorge Maurice (h.).

Cámara de Apelación del Departamento del Sud (Dolores).

Presidente: Dr. Vicente de La Colina.

Vice » Dr. Daniel G. Miró.

Vocal: Dr. Américo Uzal.

Cámara de Apelación del Departamento del Norte (San Nicolás).

Presidente: Dr. Roberto García Lanza.

Vice » Dr. Ignacio V. Aguirre.

Vocal: Dr. Cecilio Gualberto Arrúa.

Cámara de Apelación del Departamento Costa Sud (Bahía Blanca).

Presidente: Dr. Rafael C. Huergo.

Vice » Dr. Felipe Flores (h.).

Vocal: Dr. Enrique N. Mallea.

Cámara de Apelación del Departamento Sudoeste (Azul).

Presidente: Dr. Francisco J. Larrán.

Vice » Dr. Abdón Bravo Almonacid.

Vocal: Dr. José P. Doyle.



Jueces del Crimen de la Capital.

- N° 1: Dr. Rafael Ocampo Giménez.
- N° 2: Dr. Alejandro Moreno Bunge.
- N° 3: Dr. Teófilo Arturo Gomila.
- N° 4: Dr. Manuel Cotti de la Lastra.
- N° 5: Dr. Manuel T. Cañas.

Jueces del Crimen del Centro (Mercedes).

- N° 1: Dr. Juan Carlos Díaz Cisneros.
- N° 2: Dr. Alberto San Miguel (hijo).
- N° 3: Dr. Juan Carlos Augé.

Jueces del Crimen del Norte (San Nicolás).

- N° 1: Dr. Enrique M. Rolón.
- N° 2: Dr. Nicolás M. Juárez García.

Jueces del Crimen del Sud (Dolores).

- N° 1: Dr. Horacio V. Areco.
- N° 2: Dr. Eduardo Sánchez Ceschi.

Jueces del Crimen de Costa Sud (Bahía Blanca).

- N° 1: Dr. Adolfo J. Luro.
- N° 2: Dr. Alfredo A. Anguisola.

Jueces del Crimen de Sudoeste (Azul).

- N° 1: Dr. Benito N. Valdovinos.

Capital.

- Fiscal de Cámaras: Dr. Julio Sánchez Viamonte.
- Agentes Fiscales: 1: Dr. Luis Antonio Morzone.
2: Jorge H. Attwell de Veyga.
3: Esteban J. P. Mutti.

Centro.

- Agentes Fiscales: 1: Dr. José D. Ray.
3: Dr. Jorge Gallegos.
2: Dr. Juan Pio Cufre.

Norte.

- Agentes Fiscales: 1: Dr. Wenceslao Pividal.
2: Dr. Adolfo B. Civilotti.

Sud.

- Agente Fiscal: Dr. Angel R. Pla Bavio.



Costa Sud.

Agentes Fiscales: 1: Dr. Manuel Félix Santos.
2: Dr. Héctor J. Terrile.

Sudoeste.

Agente Fiscal: Dr. Gonzalo César Goyanes.

Capital.

Defensoría de Pobres y Ausentes:

Nº 1: Dr. Jorge Díez Gómez.

Nº 2: Dr. Ergasto D. Martínez.

Nº 3: Dr. Pedro I. García.

Nº 4: Dr. Manuel María Lavié.

Centro.

Defensoría de Pobres y Ausentes:

Nº 1: Dr. Vicente L. Dobarro.

Nº 2: Dr. Héctor R. Ratti.

Norte.

Defensor de Pobres y Ausentes: Dr. Alberto Peralta Bello.

Sud.

Defensor de Pobres y Ausentes: Dr. Julio A. Negri.

Costa Sud.

Defensor de Pobres y Ausentes: Dr. José M. de Mira.

Sudoeste.

Defensor de Pobres y Ausentes: Dr. Miguel Cordeviola.

CONTESTACION DE LOS MAGISTRADOS

Del señor Juez doctor Valdovinos

Azul, mayo 15 de 1935.

Señores Miembros de la Comisión de Reformas en Materia Procesal Carcelaria y de Menores, doctores Rodolfo Moreno y Eusebio Gómez. — La Plata.

Tengo el agrado de dirigirme a Vds. contestando su atenta nota fecha veinticinco de abril del año en curso en la que se dignan solicitar al infrascripto como Juez del Crimen



del Departamento Sud Oeste, su opinión respecto a varios puntos y aspectos sobre reformas al Código de Procedimientos Penal en la Provincia y cuya tarea les ha sido encomendada con tanto acierto por el Poder Ejecutivo por decreto de 5 de abril ppdo.

Mi colaboración no podrá ser todo lo eficaz que hubiera deseado, en virtud de la premura con que me es solicitada por Vds., por las tareas que pesan sobre el suscripto, y además, porque la importancia del problema que comprende, debe de ser materia de meditación y coonestación con las observaciones que la aplicación diaria de la ley va permitiendo demostrar la conveniencia de introducir modificaciones ya que el sistema vigente atenta contra la seguridad de los trámites y las garantías hacia la libertad de los ciudadanos y el orden social.

Desde hace tiempo, un movimiento grande de opinión, clamorosamente reclama la implantación del procedimiento oral, no ya solamente en los asuntos de materia penal, sino también en aquellos de competencia civil. Se ha opuesto como argumento contra la adopción del sistema oral, la falta de educación o cultura de nuestro pueblo para ser investido de un cargo de tanta responsabilidad, como lo es el de Jurado.

Desgraciadamente, la impugnación no deja de ser en verdad exacta, pues contra escasos núcleos de población que han logrado alcanzar cierto grado de cultura, independencia económica, etc., tenemos que el resto de la Provincia, refiriéndome al problema local que es el que nos interesa, dista mucho de alcanzar esas condiciones y cualidades indispensables para permanecer ajeno, o sustraerse a la lucha de pasiones o intereses de pequeños ambientes o círculos. Desde mi punto de vista, considero que aún no se encuentra en condiciones nuestra población para llenar a satisfacción tan delicadas funciones sobre las que descansa la tranquilidad y la seguridad social, el respeto a la ley y a sus instituciones.

Se opone a ello esta manera de ser que nos es tan propia. El favor, la influencia, la venalidad y los mil recursos de que disponen potentados y políticos, se pondrán en juego y pesarán fatalmente para determinar la conciencia y el voto del Jurado. De manera que creo que el Jurado popular sería hoy el más grave error en que podría incurrir nuestra le-



gislación procesal al incorporarlo para la dilucidación y resolución de los asuntos criminales.

Mi opinión en cambio es francamente favorable a la oralidad del juicio, incorporado por nuestra ley procesal vigente: El Tribunal colegiado y de Jueces letrados, con el sistema de las libres convicciones impuesto por el artículo 382 del citado Código y fallo por unanimidad de Jueces. En cuanto a la organización del mismo se puede adoptar bajo las mismas condiciones en que se encuentra, pero como la oralidad del juicio, según la nota de ustedes, será obligatoria para todas las causas y no facultativa para las causas graves como lo dispone nuestro Código, considero que el Tribunal colegiado debería entender en todas aquellas causas en que la aplicación de la pena no exceda de tres años de prisión o reclusión. En todas las demás causas el juicio oral debería llevarse a cabo ante el Juez del Crimen de cada Departamento. Se alivia así las tareas de las Cámaras al restarle su intervención en estas causas de pena reducida, ya que de otra manera sería imposible materialmente que pudiera entender en tantos procesos.

No puede discutirse que la implantación de la Justicia de Instrucción Letrada en la Provincia es de imposible realización por el momento; se opone a ello su gran extensión territorial y su falta de vías de comunicaciones rápidas.

Si con el sistema oral se pretende quitar a la policía la instrucción de los sumarios de los que depende el honor y la libertad de los ciudadanos, se lograría esta finalidad de garantía y tributo de respeto a la personalidad humana, depositando en manos de los Jueces del Crimen la resolución de las causas por medio del juicio oral; ante este magistrado, dentro de un término perentorio que podría fijarse en quince días, recibiendo el sumario de la autoridad policial se llevaría a cabo el juicio oral con la rendición de las pruebas en su presencia que obraran en la información sumaria, como las que decretara el Juzgado de oficio para salvar omisiones o completar la prueba, y la ofrecida por las partes.

En las causas en que la aplicación de la pena exceda de tres años de prisión o reclusión, el Juez del Crimen levantará el sumario hasta que llegue a plenario, debiendo elevarlo una vez producida la acusación fiscal a la Cámara corres-



pondiente para que lo resuelva en juicio oral, siempre que no se haya decretado el sobreseimiento del o de los procesados u ordenado su libertad por falta de mérito.

En aquellos casos en que en una misma causa hubiera procesados por delitos a que correspondan penas que deben ser juzgadas por la Cámara y por el Juez del Crimen, entenderá únicamente en ellas la Cámara respectiva, la que deberá resolver sobre todos los delitos.

El escaso número de Jueces, impedirá que éstos puedan constituirse en el lugar de los hechos cuando se produzcan fuera del asiento del Juzgado varios simultáneos que impongan por su naturaleza su presencia en el sitio; esta imposibilidad se puede subsanar con la creación de un cuerpo de inspectores sumariantes con título de Escribano por lo menos, los que dependerán directamente de los Jueces del Crimen una vez de ser nombrados por la Suprema Corte de Justicia y cuyos cargos serían inamovibles mientras durase su buena conducta o no incurrieran en faltas graves, teniendo dichos Secretarios sumariantes a su cargo la instrucción de los sumarios encomendados por los Jueces.

Los juicios orales a cargo de los Jueces del Crimen podrán celebrarse en el asiento del Juzgado o en las Municipalidades del partido en que ellos se hubieran producido, siendo facultativo de los Jueces la designación del lugar. Con esta disposición se satisface la aspiración señalada por los defensores del sistema oral, de que el pueblo se entere de como se administra la Justicia que paga.

Estos son los lineamientos generales o médula del sistema oral que puede aplicarse en nuestra Provincia, en mi concepto, quedando a cargo de esa digna comisión todo lo que se refiere a su articulado sobre la organización, forma, funcionamiento, etc.

Pasando a evacuar ahora la consulta respecto a la cuestión del término sobre el secreto del sumario e incomunicación de los procesados, soy de opinión que para asegurar los altos fines sociales de la Justicia, el término para ambos debe ser amplio, debe reaccionarse contra la brevedad angustiosa del artículo 444 de nuestro Código de Procedimiento penal. La práctica demuestra sobre todo cuando se trata de hechos graves, y hoy, en que los delincuentes revelan conocer las disposiciones de las leyes en que pue-



den ampararse, que el término de cinco días resulta demasiado breve para poder dentro de ellos reunir en muchos casos los elementos legales necesarios para establecer su responsabilidad penal, es decir la participación que han tenido en los hechos, y la destrucción de las coartadas que preparan para eludir las sanciones penales, permitiendo se realicen las diligencias necesarias para acreditar en forma indubitable asimismo, la existencia del cuerpo del delito, y ello sólo se puede conseguir con la consiguiente reserva que el secreto del sumario impone a las diligencias y la falta de comunicación del procesado con sus familiares o el exterior. Ninguna intranquilidad ni alarma a la gente honrada puede provocar la ampliación de dichos términos que tienden a asegurar su defensa contra los elementos que perturban su tranquilidad y lesionan sus intereses privados y sociales: hay que defender a la sociedad contra la impunidad de quienes transgreden sus leyes.

Durante un término igual de diez días, el sumario debe ser secreto, porque si antes se sostenía que tal sistema se prestaba a venganzas, persecuciones y maniobras de las malas policías, el nuevo procedimiento para la instrucción de sumarios, la intervención directa del Juez del Crimen o sus Secretarios sumariantes, la oralidad de debates y el pronunciamiento en base a las libres convicciones de Jueces letrados que juzgan, desaparece toda causa de inquietud y temor desde que existen garantías en los métodos y en los Magistrados.

Respecto a la apreciación de la prueba, considero también que ésta debe de serlo con sujeción al criterio de las libres convicciones; las inhabilidades y causas de tachas podrán oponerse contra los testimonios, y los Jueces al fallar aceptarán o rechazarán los dichos según su convicción.

En la práctica se observa con frecuencia casi diaria, que la prueba de testigos, es de las pruebas la más sospechosa y falsa si se quiere. Nuestro pueblo, y hablo en términos generales, no tiene el verdadero concepto de lo que es el testigo y de su verdadera función ante la Justicia. Se miente con suma facilidad y con la seguridad de su impunidad; y se miente tanto sea para favorecer como para perjudicar. En el ejercicio de la profesión nos vemos muchas veces for-



zados a crear una prueba falsa, y que luego, desde el sitio del Magistrado, condenamos y nos alarmamos.

Por eso se acuerda a las partes el derecho de impugnar al testigo produciendo la respectiva prueba sobre la inhabilidad o tacha, que pueden ser las mismas contenidas en los artículos 140 y 141 del Código de Procedimientos actual, pero el Tribunal o Juez que juzgue en juicio oral no está obligado a admitirla cuando su convicción, es decir, su conciencia le revele que los dichos del testigo son sinceros y le llevan ese convencimiento de veracidad indispensable a todo pronunciamiento fundado en el sistema de las libres convicciones.

Estas consideraciones y otras que sabrán suplir el elevado criterio de ustedes me impulsan a no dar una mayor extensión a esta colaboración que tiene por finalidad expresar su adhesión a la implantación del juicio oral en materia penal por Tribunales Letrados, y a la implantación también de un sistema, que sin ser el verdadero de Justicia de Instrucción, se aproxima a él en la única forma practicable, a mi juicio, en la Provincia, cuya fuente de recursos no permite que el problema pueda resolverse en la forma en que en realidad debe serlo.

Sin otro motivo me es muy grato saludar con mi más alta consideración y ponerme a las enteras órdenes de ustedes.

Muy atento y S. S.

DR. BENITO N. VALDOVINOS.
Juez en lo Criminal y Correccional
del Departamento Sud Oeste.

Del señor Juez doctor Gomila

Señores doctores Eusebio Gómez y Rodolfo Moreno.

De mi consideración:

Tengo el honor de acusar recibo de su atenta fecha 25 del pasado, por la que esa Comisión se dirige a los Magistrados de la Provincia, requiriendo sus opiniones sobre la reforma a realizarse en la organización de la Justicia y Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional.

En esta comunicación se hace saber que la reforma a realizarse «deberá implantar el juicio oral y público, de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo y las opiniones vertidas en la última convención constituyente», norma ésta dentro de la



cual han de producirse las respuestas dirigidas a esa Comisión, respuestas que reclama; y ante la autoridad indiscutible de quienes tienen a su cargo esta tarea, sería inexcusable una falta de contestación, aunque deba disintirse con las líneas principales del proyecto enunciado.

Por ello, me veo en la obligación de declarar mi incredulidad sobre los beneficios que pueda reportar el juicio oral bastando para justificarla, el resultado que éste nos diera después de ser introducido en el Código de Procedimientos de la Provincia que proyectara Jofré, hasta el punto de que en la actualidad es algo raro y excepcional que se lleve a la práctica un solo juicio por este procedimiento.

Desde que Marcelino Ugarte promulgó el 15 de enero de 1915 el Código de Procedimientos que estableció en forma optativa, por primera vez a título de ensayo, el juicio oral, han transcurrido veinte años, en los que se ha demostrado el fracaso más rotundo y categórico de esta institución exótica que a toda costa se desea implantar en nuestra tierra, poco propicia para ella.

En ese breve lapso de tiempo se ha logrado que los abogados que ejercen su profesión en el fuero penal, con rarísimas y muy contadas excepciones, rehuyan este procedimiento y que los acusados no lo deseen en ningún caso, optando siempre por el procedimiento escrito con dos instancias y que permite recursos para ante la Suprema Corte de Justicia.

Sería indudablemente curioso conocer el dato de cuántos son los juicios orales realizados en la Provincia de Buenos Aires desde la fecha de su implantación. Y él resultaría tan reducido, tan insignificamente ridículo, que bastaría para documentar la afirmación de que ha fracasado entre nosotros.

Ello tiene por motivo causas bien visibles; el procedimiento escrito ofrece mayores garantías, tiene recursos más amplios, da lugar al análisis más meditado y profundo del proceso sin exponerse a que una sentencia pueda estar fundada en impresiones momentáneas de índole sentimental, sino en los principios del derecho, base de las leyes, en los comentarios de éstas, en la biblioteca del magistrado que ha de fallar, contemplando el factor humano de acuerdo con los artículos 40 y 41 del Código Penal, pero aplicando su experiencia y su saber con las reglas establecidas para la apreciación de la prueba.



Al hacerse una reforma como la que se pretende, deben tenerse en cuenta dos importantes factores: la seguridad social y las garantías individuales, las que se encuentran lejos de estar amparadas por el juicio oral de instancia única, expuestos a los errores o a las injusticias o apasionamientos humanos en una forma mucho mayor que en el procedimiento escrito.

No he de hacer una reseña de autores conocidos, adversos al juicio oral; quiero, sin embargo, recordar las palabras de uno de ellos, más profundo que difundido, el doctor Julio Herrera, cuando en la página 31 de «La Reforma Penal», dice:

«En tanto, los que como nosotros no admiten, ni probablemente admitirán jamás, el juicio por jurados, que no está en sus hábitos y que tiene gravísimos inconvenientes, piensan y con sobrada razón, que él no ofrece garantías eficaces de represión y que la justicia popular puede a veces estar imbuída de prejuicios...».

El jurado popular es inadmisile entre nosotros. Tal vez, y sólo tal vez, pudiera ser aplicado en algunos de los centros de la Provincia, pero es necesario legislar para toda ella, pues no está dentro de la educación especial y apropiada que necesita nuestro pueblo.

No he de hacer la injuria al pueblo de la Provincia, de considerarlo como inculto e ignorante; me refiero a una educación especial, referente al caso en discusión, la que es difícil de adquirir y no se puede crear con una ley, porque ella es contraria a nuestros antecedentes, porque es ajena a nuestras costumbres, porque es opuesta a nuestra manera de ser, porque tenemos defectos capitales que la hacen imposible.

Y voy a poner el caso, uno de ellos referente a nuestra política, a la política criolla, que ha malogrado tantas grandes iniciativas y que ha carcomido muchas de nuestras grandes instituciones, esa política que en más de un caso ha llegado a pretender que el afiliado a un comité tenga hasta el derecho de dilynquir impunemente; los miembros de un jurado popular están muy cerca, más aún, al alcance inmediato de esa política que actúa sobre ellos, y es necesario que los jueces estén lo más lejos posible de aquélla, para que puedan estar libres de sus sugestiones.

Hay que tener en cuenta la existencia de muchos delitos de orden común y a los que por un motivo u otro se les da ca-



rácter político por sus vinculaciones. En estos casos se podría llegar hasta anticipar el fallo, conociendo las personas que componen el jurado. Es gravísimo el peligro que correría la justicia supeditada a semejante norma.

Se sugiere la posibilidad de reemplazar al jurado popular con el establecimiento de un Tribunal Colegiado, compuesto por Jueces de Derecho, que dirija el juicio y dicte sentencia.

Me pregunto entonces, ¿si por el solo gusto de que el procedimiento sea oral y no escrito, es necesaria la reforma, cuando tenemos en materia penal ese Tribunal Colegiado que constituye una Cámara de Apelaciones, que revé los fallos de primera Instancia y reedita el juicio íntegramente si lo considera necesario, fallándolo después de un estudio minucioso, hecho primero por cada uno de los jueces, separadamente y realizado una vez más en el acto del acuerdo? ¿Qué mayores garantías puede exigir un acusado, como la seguridad social?

No es cuestión de reformar por reformar. El juicio oral por jurados es una institución de otros países que nos deslumbra y nos atrae; vemos de ella lo mejor, por eso es que no apreciamos como se deben nuestras instituciones con arraigo verdadero, hechas para nosotros y que se han ido formando con nuestra nacionalidad, poco a poco, de acuerdo con sus exigencias y su progreso, que pueden cada día ser mejoradas sin necesidad de un cambio tan fundamental que destruya todo lo existente y que responsabilice a sus autores para el futuro, por el fracaso que ello significa, porque la justicia que hoy tenemos, mala o regular — como se quiera — pueda llegar a ser peor aún.

¿Qué se busca, qué se persigue con el juicio oral? La celeridad en la Justicia, falta que es tal vez la única que pueda tacharse a la actual, pero que hay mil medios para obtenerla y que en lugar de lograrse por los procedimientos que se pretende arbitrar, haría que el mal se hiciese más agudo. Y ello se demuestra fácilmente. Es necesario para que el proyecto no fracase, determinar el número de causas que se tramitan actualmente en la Provincia y de acuerdo con ello crear el número proporcional de Tribunales Colegiados, asignando a cada uno de ellos la cantidad proporcionada al número de causas que el Tribunal pudiera conocer y fallar. Y ese número sería limitado, ya que a los jueces no puede considerárseles como má-



quinas de fabricar sentencias, sino que ante ellos deberá subsanciarse íntegramente el juicio, producirse acusaciones, defensa, prueba y sentencia, ofreciendo toda clase de garantías.

Y todo ello hará que «la cantidad» de trabajos de estos Tribunales sea muy reducida, requiriendo, como consecuencia para la provincia de Buenos Aires, un número tan grande de ellos que el costo de los mismos los haría imposible.

Tenemos como ejemplo el asunto de los juegos prohibidos, para los que se estableció juicio oral ante los jueces del crimen, no ante Tribunal Colegiado, asegurándose con ello la impunidad de los acusados por la prescripción de las causas ante la imposibilidad material de resolverlas y ello es el peligro más grande que ofrece la reforma que se anuncia.

Muchos otros motivos y argumentos pueden ser enunciados contra el juicio oral, pero ellos, han sido expresados en múltiples oportunidades, por lo que limito esta exposición a la situación práctica y real en que se encontrará nuestra justicia: he actuado en ella diariamente durante más de veinticinco años y a pesar de ello no alcanzo a concebir cómo puede encuadrarse dentro de nuestras instituciones y nuestras costumbres el juicio oral probado ya y abandonado también ante su ineficacia.

»

Dice en su atenta nota que «cualesquiera que fuese el sistema e seguirse, se impone la instrucción previa, anterior al juicio, que convendría que ella fuese letrada, pero la extensión de la Provincia a pesar de su reducida población, obligaría a crear numerosos juzgados y los recursos de que se dispone no permiten una crecida erogación».

Estoy de acuerdo en que es necesaria, más aún, impostergradable la creación de la Justicia de Instrucción, que ello constituiría un gran progreso institucional y una de las garantías más grandes para las personas y la sociedad; que esa justicia debería ser letrada, inamovible y sobre todo *dependiente exclusivamente* del Poder Judicial.

Conviene por mil causas que son del dominio público y que no es necesario exponer, retirar a la Policía las facultades de Instrucción que tiene actualmente, haciéndola circunscribirse estrictamente a su función propia y exclusiva, así se tendrá policía y se hará policía.



Y es un problema que no tiene solución a medias, sino integral y definitiva para toda la Provincia. Se dice que se opone a ello la extensión de ésta y en la falta de recursos, pero ellos existen y se emplean actualmente.

Libre la Policía de la instrucción del sumario, puede pasar a los Juzgados de Instrucción todo el personal que se dedica actualmente a estas tareas. Verifíquese en cada Comisaría cuál es personal de calle y cuál el de sumarios, y se verá que este último es numerosísimo y competente para proseguir sus tareas bajo otra denominación. El número de comisarios podrá reducirse grandemente, como el de inspectores y la División Judicial que actualmente tiene la Jefatura de Policía podrá desaparecer sin inconveniente alguno, porque ya no será necesaria.

Se ve, pues, que los medios y recursos existen. No habrá solución del asunto mediante la designación de una docena o dos de abogados instructores que al principio sabrán menos que los comisarios, en reemplazo de muchos de éstos que son capaces de ser maestros en la materia y que son bien conocidos en la Repartición.

Y más aún, téngase presente que al suprimir a la Policía sus facultades para la instrucción de sumarios, se le quita así un arma peligrosa, que más de una vez ha sido esgrimida en política, con grandes resultados para fines electorales. Las policías habrán dejado de ser las policías bravas de que nos hablan diariamente los órganos de publicidad, para estar controladas de cerca por el Poder Judicial, independiente y seguro para ejecutar libre y honestamente sus funciones.

Ruego a ustedes quieran excusar la modestia de esta colaboración bastante precaria, para el trabajo enorme a que ustedes se encuentran abocados, pero que es fruto del convencimiento sincero adquirido a través de luchas y labor ininterrumpidas de largos años.

Saludo a ustedes atentamente y S. S.

**Del señor Defensor de Pobres, en Mercedes,
doctor Vicente L. Dobarro**



*Señores doctores don Rodolfo Moreno y don Eusebio Gómez,
La Plata:*

Tengo el agrado de acusar recibo de la nota circular fecha 25 del mes ppdo., en la que se sirven recabar la colaboración de la Magistratura, en forma de opinión sobre la posibilidad, y, en tal caso, faz práctica de implantación del juicio oral en materia penal, para cumplir los propósitos del decreto del P. E. del día 5 de abril último.

He leído y releído la atenta nota de Vds. y los debates de la Convención Constituyente que se ocupan del asunto en la reunión 4ª, págs. 15 y 30; 5ª reunión, pág. 35; 12 reunión, págs. 18, 19, 35 y 36, y 13 reunión, págs. 3ª y 4ª, llegando, en última síntesis, a la conclusión de que los señores convencionales de la mayoría y de la minoría, coincidieron en el común anhelo de instituir la oralidad del juicio en instancia única; resolviéndose, por fin, dejar librado a la acción de la Legislatura, la oportunidad de la realización de esa idea, medios y circunstancias de su efectividad, lo que el P. E. pone en principio de ejecución, en el carácter de poder colegislador, asesorándose por la comisión técnica que Vds. integran, con la autoridad científica que es de pública notoriedad. Pero, para asegurar el ensayo y no malograr el proyecto, puntualizan la necesidad de encarar las respuestas con criterio realista, teniendo en cuenta los diversos factores que se oponen a una organización completa de la Justicia de Instrucción, Policía Judicial y Tribunales o Jurados Calificados, entre los que destacan la extensión geográfica y las dificultades económicas del erario Provincial.

Así concretada la encuesta judicial, no es difícil corresponder a la requisitoria — contribuyendo a la ardua tarea que han afrontado Vds. — con el aporte del pensamiento individual, expuesto como contestación categórica a un interrogatorio claro y conciso.

Pienso, entonces, que ante la necesidad de concluir con el procedimiento escrito, cuya eficacia teórica no se logra alcanzar en la práctica, conviene, por ahora, no introducir más



alteraciones que las estrictamente indispensables, a fin de realizar la experiencia de inmediato, y, con su observación, planear, luego, las reformas totales de organización y procedimiento, lo que implica dar por sentado que deben mantenerse los principios procesales en vigencia para la instrucción sumarial, inclusive la incomunicación del encausado, con la salvedad de que podrá asumir su defensa el abogado que por sí, o por indicación de familiares o amigos se presente, en tal carácter, y sea aceptado por el procesado, con quien, aún durante la incomunicación, podrá entrevistarse en presencia del instructor, las veces y durante el tiempo que se establezca legalmente. Y opino así, porque una reforma sustancial a la ley de enjuiciamiento, aparejada a la nueva organización de la justicia penal, entorpecería el desenvolvimiento eficaz de la Policía auxiliar que, más o menos compenetrada del régimen actual, tropezaría con las dificultades inherentes a todo personal lego, para orientarse y cooperar con acierto en el nuevo sistema, dado el supuesto de una modificación completa. Eso sí, debe respetarse, acatarse y cumplirse la publicidad para los actos judiciales que estatuye el artículo 157 de la Constitución, como también el de igualdad ante la ley, derogándose las disposiciones facultativas u optativas, respecto a la elección del juicio, hoy vigente y no permitir, bajo ningún concepto, la de la composición del Tribunal que se insinúa. Para ello considero necesario abrogar la competencia atribuida a los jueces de paz en los delitos clasificados como correccionales, con penalidad no mayor de un año de prisión y establecer dos categorías o divisiones, atendiendo a la calificación de los hechos, con prescindencia de la pena asignada a los delitos, a objeto de determinar la jurisdicción «razone materia», entre los jueces en lo penal y las cámaras del crimen, compitiendo a aquéllos, los de primera nominación, los más leves o menos graves, y, a estas últimas, los de segunda nominación o más graves, dentro de una jurisdicción territorial, por «distritos» — como dice el artículo 154 de la Constitución — comunes a un juez civil, un juez penal y a una cámara del crimen y apelaciones en lo civil y comercial. Tales distritos que se señalarían alfabéticamente (A, B, C, etc.), teniendo por base la población, se completaría con el número de partidos colindantes hasta que,



uno, subdividido o no, o varios lleguen aproximadamente a la de con su población total, urbana y rural, 274.166 habitantes, que resulta de dividir los 3.290.000 que pueblan la Provincia entre 12 distritos que propongo como base, según lo explicaré más adelante, a fin de proyectar a continuación, a título de ejemplo demostrativo, las dos divisiones a que aludo anteriormente, a saber: «Delitos menos graves, de competencia de los jueces en lo penal»; lesiones, abuso de armas, duelo, excepto si resultase un homicidio; calumnia e injuria; delitos contra la libertad de prensa; abandono de personas; adulterio; rapto; matrimonios ilegales; supresión y suposición del estado civil; violación de domicilio; violación de secreto; delitos contra la libertad de trabajo y asociación; delitos contra la libertad de reunión; hurto; robo, excepto cuando se cometiese homicidio; extorsión; usurpación; daño; delitos contra el orden público; desacato; usurpación de autoridad; títulos u honores; violación de sellos y documentos; falsos testimonios; encubrimiento; evasión.

«Delitos «más» graves, de competencia de las cámaras del crimen». Homicidios, sin excepción alguna; violación o estupro; corrupción y ultraje al pudor; delitos contra la libertad individual; estafas o defraudaciones; quebrados y otros deudores punibles; incendios y otros estragos; delitos contra la seguridad de los medios de transporte; piratería; delitos contra la salud pública; atentado y resistencia a la autoridad; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos; cohecho; malversación de caudales públicos; negociación incompatible con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; prevaricato; denegación y retardo de justicia, delitos contra la fe pública; de los fraudes al comercio e industria; falsificación de sellos; timbres, marcas y documentos en general; del pago de cheques sin provisión de fondos.

Ahora bien, descartando por el momento a los jurados populares, como se indica y cuyo advenimiento quizá se prepare y facilite con el ensayo previo, por medio de jueces letrados y permanentes, en el orden de ideas de que me ocupo, opino y sostengo que con el cuerpo de magistrados y funcionarios que forman el Poder Judicial, puede llevarse a cabo la iniciativa; con un ínfimo aumento, cuando mucho, en el



Presupuesto de la Administración, fácil de cubrir con los recursos fiscales calculados.

Actualmente la Provincia tiene atendida su administración de justicia letrada, por una Suprema Corte; 9 cámaras de apelación; 27 juzgados de primera instancia; 14 agentes fiscales; 9 asesores de menores y 10 defensores de Pobres y Ausentes, con el personal de empleados correspondientes a cada uno.

Pues bien: sin modificar la composición de la Suprema Corte, en orden a lo debatido en la Constituyente, se puede acomodar el funcionamiento de los jueces y Tribunales restantes para hacerlos servir al propósito que se persigue, dividiendo el territorio de la Provincia en 12 circuitos, atendidos por 12 cámaras del Crimen y apelaciones en lo civil y comercial, 12 jueces penales y 12 jueces en lo civil y comercial, es decir, un tribunal y un juzgado de cada nominación para cada uno de los doce distritos. Hoy día, de las 9 cámaras, 2 de la Capital y 1 del Centro, conocen sólo en asuntos civiles: 1 en La Plata y 1 en Mercedes, atienden en materia criminal, y las otras 4 de los demás departamentos, son mixtas o mejor dicho atienden ambos fueros.

Auspicio, entonces, la creación de 3 cámaras y la distribución de las 12, entre los 12 circuitos, con jurisdicción en todas las materias, sustanciando a la vez, en juicio oral e instancia única las causas criminales del 2º grupo, precedentemente mencionado, o sea, de los delitos «más graves». Y como en el presente existen 12 juzgados civiles, digamos así para simplificar, cada uno se asignaría a un distrito, procediéndose de igual modo con 12 de los 15 juzgados del crimen, debiendo refundirse, los 3 restantes, en 1 cámara, con lo que sólo habría que nombrar 6 camaristas para las dos restantes y adjudicar a cada cámara nueva, el personal adscripto a los juzgados que se refunden. Dejo expresa constancia de mi opinión decididamente contraria a la supresión de las fiscalías de cámaras y con esta salvedad anoto que, de persistirse en ello, como se ha ejecutado en los demás departamentos judiciales, el Fiscal de Cámaras de la Capital, integraría una de las cámaras y se contaría con el personal de esa oficina para los nuevos cargos y empleos.

De los 14 agentes fiscales, 12 lo serían para actuar ante el juzgado civil y cámara respectiva de cada circuito: debiendo

los otros dos ser designados defensores de Pobres y Ausentes, ante los mismos jueces y tribunales, completándose el cuadro de defensores oficiales, que, como antes dije, solo llegan a 10, actualmente.

Las 9 asesorías de menores se aumentarían en 3, para actuar una en cada distrito, ascendiendo a 3 secretarios letrados de primera instancia. El número total de secretarios en lo civil y criminal alcanza a 73; de los que corresponden 2 a cada juzgado del crimen, 5 a cada juzgado civil de La Plata, 4 a Dolores, 3 a los de Mercedes y Azul, y 2 a los de Bahía Blanca.

Entiendo que ello, por sí solo, acusa la necesidad de rever la situación y que, con la nueva organización no hay motivo para semejante disparidad que impresiona como arbitraria. Concretamente opino, que debe fijarse en 3 el número de secretarios para cada juzgado civil, y 1 para cada juez en lo penal, vale decir, 36 en total para aquéllos y 12 para éstos, lo que suman 48, en conjunto y revela un excedente de 25 secretarios que entre los que poseen títulos de abogado deberían nombrarse 12 fiscales y 12 defensores ante los «Juzgados en lo Penal», con los sueldos de sus actuales empleos, porque si bien es de mayor responsabilidad y espectabilidad el nuevo cargo, también es de tarea especial y más reducida que la propia de los demás agentes fiscales y defensores oficiales.

El secretario restante, se ascendería para desempeñar una de las asesorías a crearse, y todo el personal de empleados se distribuiría entre las diversas instituciones de Justicia Letrada.

Creo que entre los distintos modos de llevar a la práctica la institución de la oralidad del juicio, el plan esbozado es uno de los más factibles y viables, porque el trabajo se equilibra en lo posible, dividiendo las tareas y distribuyendo las funciones en forma equitativa, ya que si bien las cámaras conocerán en las causas más graves en lo penal y apelaciones en lo civil, no sólo se aumenta su número, lo que aminora los asuntos, sino que también se liberan de todas las causas leves o menos graves, que constituyen la mayor parte de los procesos. En cuanto a los juzgados cabe observar que la jurisdicción ajustada a la población regulará su mejor desenvolvimiento, aparte de que todas las causas de segunda nomi-





nación o más graves, pasan a las cámaras del crimen. Para unas y otras, el aumento de los fiscales y su desempeño activo, con acción exclusiva hará cesar la confusión de funciones que se advierte en muchos casos. Por lo tanto la vigilancia de la instrucción le correspondería por entero y para asegurar la eficiencia de la Policía, quizá conviniese establecer que la remoción de su personal, solo podría operarse con acuerdo a petición del Ministerio Fiscal.

Deseando a Vds., el mayor éxito en la honrosa misión que se les ha confiado, aprovecho la oportunidad para saludarlos con la consideración más distinguida.

VICENTE L. DOBARRO.
Defensor de Pobres de Mercedes.

Del señor Agente Fiscal doctor Gallegos

Doctores Rodolfo Moreno y Eusebio Gómez. — La Plata.

Con sumo agrado he recibido la atenta nota del 25 del abril próximo pasado, en la que se me solicita opinión sobre las reformas al Código de Procedimientos y Ley Orgánica de la Justicia en lo Criminal. Digo con sumo agrado, porque creo que proyectar a base de una encuesta entre personas llamadas a aplicar o interpretar la ley, es obra digna de aplauso.

La Comisión de que forman parte, se propone ante todo organizar el juicio oral público y obligatorio para todas las causas criminales, de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo y las opiniones vertidas en la última Convención Constituyente.

Soy partidario del juicio oral, por la mayoría de las razones que los hombres de derecho han expuesto sistemáticamente desde hace muchos años, que no es el caso repetir en esta oportunidad dada su amplia difusión, pero opino que en la Provincia de Buenos Aires, el anhelo es prácticamente irrealizable si no se cuenta con los medios económicos y necesarios para un perfecto funcionamiento. Con esto quiero decir que no es posible legislar como vía de ensayo sino en forma definitiva,



porque el ambiente social no es un laboratorio en el cual pueda maniobrarse con la facilidad del alambique; si falla el experimento la repercusión es grave. Antes que un fracaso es preferible el actual estado de cosas con las pequeñas modificaciones indicadas por la experiencia.

Ser parco en legislación no significa sostener que la defensa social puede garantizarse con el sistema escrito, ni demuestra que los funcionarios somos conservadores por temperamento, como lo dijo el doctor Tomás Jofré. Sencillamente, asimilamos las enseñanzas de los profesores de derecho cuando dicen que las instituciones y doctrinas extranjeras no deben ser aceptadas sin el examen y estudio detenido del medio en que van a actuar, y sin la compulsa de las necesidades o exigencias que puedan aconsejarlas.

Teniendo en cuenta estos postulados, corresponde interrogar si la reforma es posible y si ella es indispensable.

El ambiente social de la Provincia de Buenos Aires no está preparado aún para el juicio oral, pero ello no constituye obstáculo para su implantación, porque el pueblo y los abogados se adaptarán progresivamente cuando la nueva ley se encuentre en vigencia. La verdadera valla del juicio oral consiste en la extensión del territorio, y este inconveniente no se subsana sino con una crecida erogación que permita el funcionamiento de Tribunales suficientes y el traslado de los testigos, peritos y funcionarios de la administración judicial. Si se legisla a base exclusiva de economía se crea un mecanismo mucho más lento que el actual y en perjuicio de la buena justicia.

Los detractores del procedimiento escrito vigente, sólo concretan sus cargos en que él es lento, que la instrucción policial es deficiente, y que los magistrados no están en contacto directo con los hechos. Ya no puede hablarse de sistemas inquisitivos en un Código que siempre favorece al procesado.

La primer imputación es errónea, porque las estadísticas demuestran que el tiempo de duración normal de los procesos no pasa de seis meses, y existe cejería en los despachos por los términos perentorios establecidos en la ley, y el control de la Suprema Corte y Procurador del mismo Tribunal. En el Departamento Judicial del Centro —por ejemplo— han entrado durante el año 1934, 3.822 causas en los tres Juzgados del Crimen, y han salido 3.593 causas en el mismo año. Los Jueces dictaron



667 sentencias definitivas, de las cuales fueron apeladas ante la Excelentísima Cámara 354, quien despachó 334. Los Juzgados, la Excelentísima Cámara y las Fiscalías, se encuentran al día.

La crítica a la instrucción de los procesos es justa, y el remedio está en la creación de la policía judicial dependiente de la Suprema Corte.

La tercera objeción es la realmente grave, pero ella no puede ser solucionada con un sistema oral en que los Jueces se vean obligados a decidir sin elementos suficientes y sin estudio detenido de las causas. El Tribunal no debe transformarse en un recinto de fiebre por los plazos angustiosos, ni las penas pueden ser aplicadas a golpe de martillo como en los negocios bursátiles. La buena administración de justicia exige la tregua, el estudio y la meditación.

En resumen: el juicio oral no es indispensable, pero su implantación es posible si se contemplan verdaderas necesidades.

El año judicial tiene aproximadamente 226 días enteros hábiles. Suponiendo que cada juicio oral dura como término medio dos días, resultará que cada Tribunal no puede entender sino en 113 procesos si los funcionarios concurren diariamente a sus despachos (no preveo el caso de ausencia por enfermedad u otras causas).

El ideal sería la creación de tantos Tribunales Colegiados como fueran indispensables, y no la adopción de jurados populares, que ya se encuentran desprestigiados en el extranjero y repudiados por los jurisconsultos del país en el reciente Congreso de Mendoza. El Departamento del Centro necesitaría diez Tribunales, porque allí tramitarán 1.000 causas aproximadamente (incluyendo las de los Juzgados de Paz). Pero como la situación económica de la Provincia no permite abultar el presupuesto en esa forma, debe pensarse en un sistema que contemple a la vez, el buen servicio público, y las finanzas del Estado.

Expongo a continuación las bases sobre las cuales considero corresponde asentar el Código de Procedimientos y la Ley Orgánica en lo Criminal.

1° Formación de la Justicia Correccional y del Crimen. La primera con los actuales Jueces del Crimen y Agentes Fiscales, quienes serán competentes para entender en los delitos que



tengan pena hasta cuatro años de prisión, multa o inhabilitación. Y la última con las actuales Cámaras de tres miembros y fiscales, que conocerán en los hechos delictuosos castigados con más de cuatro años de prisión y reclusión. En los departamentos judiciales donde no existan ni Cámaras del Crimen ni Fiscales de Cámara, deberán crearse; como así también los Jueces, Agentes Fiscales, Defensores de Pobres y demás funcionarios indispensables. El Departamento del Centro necesitará: seis Jueces, otros tantos Agentes Fiscales, Secretarios y Auxiliares, y nueve Escribientes, para lo Correccional; tres Cámaras de tres miembros cada una; otros tantos Fiscales, Secretarios y Ujieres, cinco Escribientes, y tres Ordenanzas, para el fuero criminal; y cuatro Defensores de Pobres.

2º Establecimiento de la Policía Judicial dependiente de la Suprema Corte en cuanto a los nombramientos y remociones, pero a las órdenes directas de los Jueces Correccionales y de los Presidentes de las Cámaras del Crimen, para la instrucción exclusiva y previa al juicio oral, y con las mismas facultades de los actuales Comisarios.

3º Constitución del Ministerio Público, como magistratura especial, con facultades de ordenar la investigación de delitos a la Policía proyectada, y de decidir sobre el archivo de las causas en la oportunidad que más adelante se indicará.

4º Erección del estatuto o escalafón del funcionario, mediante un orden confeccionado y publicado todos los años por la Suprema Corte, de acuerdo con los antecedentes que obren en las fichas personales. A tal efecto deberá crearse un registro especial, donde se anoten los méritos de los funcionarios por su actuación distinguida. Dicho escalafón deberá ser respetado por el Poder Ejecutivo; y en el caso de que éste se aparte de sus conclusiones, fundará las causas en el pliego que envíe al Senado. El Procurador de la Corte será el llamado a controlar su cumplimiento.

5º Denuncia de los delitos ante los funcionarios policiales o el Ministerio Público.

6º Supresión del particular damnificado y de los sobreseimientos.

7º Términos actuales de prevención e incomunicación del acusado, porque la práctica aconseja su conveniencia.



8° Publicidad del sumario, porque así lo determina el artículo 157 de la Constitución.

9° Prisión preventiva por los Jueces Correccionales y Presidentes de Cámaras del Crimen, con el requisito de la fecha del juicio oral, cuando una vez recibido el sumario de la Policía y pasados los autos en vista a los Fiscales, éstos decidan proseguir la acción pública.

10. Procedimiento oral, público y obligatorio para todos los delitos, sin opciones y sin privilegios para ninguna de las partes.

11. Carácter de las pruebas y su apreciación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 227 y 228, con excepción del requisito exigido al Fiscal, cuando los testigos del sumario se encuentran ausentes, que debe suprimirse.

12. Interrogatorio directo del Fiscal al procesado, y a los testigos.

13. Sesiones consecutivas en cada juicio oral, sin determinación de tiempo y sólo hasta terminado el examen de las pruebas, porque lo dispuesto en el artículo 279 del Código de Procedimientos, sólo se explica en un jurado popular y no en un Tribunal de derecho, que ofrece suficiente garantía y respeto.

14. Veredicto por simple mayoría de votos y con la sola declaración de culpabilidad o inocencia; y

15. Sentencia que podrá fijar indemnizaciones pecuniarias, con los requisitos de los artículos 280 y 284 (última parte) dictada dentro de los 10 días de leído el veredicto condenatorio por Secretaría.

Antes de concluir, sugiero la conveniencia de crear varios impuestos con el objeto de aminorar la carga que pesará en el presupuesto provincial. Creo que podrían gravarse las aceptaciones de cargos de los defensores particulares (con pesos 5 o 10, según la naturaleza de los procesos), la aceptación de cargo de segundo o más defensor, las indemnizaciones fijadas en las sentencias (en forma proporcional), el ofrecimiento de prueba que exceda de cierto límite y de peritos no oficiales, etcétera. Igualmente sería beneficioso organizar el cobro Fiscal de las costas devengadas en los procesos.

Con lo expuesto, doy por concretados mis puntos de vista sobre las principales cuestiones planteadas por los señores Miembros de Comisión, en la inteligencia que ello no constituye

más que un modesto esfuerzo sugerido con motivo del desempeño diario de la función judicial.

Saluda a ustedes con la consideración más distinguida.

JORGE L. GALLEGOS.



Del Señor Juez del Crimen doctor N. Mario Juárez García

San Nicolás, junio 30 de 1935.

Comisión de Reformas en materia procesal, Carcelaria y de Menores. — La Plata.

Respondo a la consulta formulada por esa Comisión, a los magistrados del fuero criminal de la Provincia de Buenos Aires. y lo hago en forma breve, y sin mayores motivaciones por tratarse de cuestiones ampliamente debatidas, con «pro» y «contras» por demás conocidas.

Soy un decidido partidario del juicio oral y creo con idéntica convicción en las ventajas del tribunal letrado sobre el jurado popular, dentro de nuestro medio.

*

Pienso que el juicio oral debe ser obligatorio para toda clase de causas, —criminales, correccionales y de faltas,— y no creo que el ensayo contenido en el código vigente, al establecerlo en forma optativa para las causas graves, haya evidenciado el fracaso del sistema.

Los actuales juicios orales ante las Cámaras de Apelación no pasan — por lo general — de grotescas parodias en las que los jueces letrados, acostumbrados, como jueces de derecho a fallar con arreglo al sistema de las pruebas legales, desvirtúan en la práctica los propósitos del legislador. Y como si ésto no fuera bastante, por espíritu de defensa —no muy legítimo por cierto— algunas cámaras de apelación han ideado frecuentes trabas y demostrado excesivos rigorismos que sembrando entre los procesados el temor y entre sus defensores la desconfianza, han convertido el juicio oral en una institución procesal en desuso.



Al respecto me refiere un abogado del foro nicoleño, orador galano y jurisconsulto de nota, que al principio de su carrera profesional, trabajó intensamente en materia penal y llevó numerosas causas a juicio oral, pero que fueron tantos y muchas veces tan injustificados sus fracasos, que no pudo menos de volver al procedimiento escrito, a pesar de sus tantos y tan graves inconvenientes.

Otra cosa muy distinta ocurrirá cuando los jueces no se vean constreñidos a andar a tumbos entre el procedimiento oral y el escrito y entre los sistemas antagónicos de las pruebas legales y de las libres convicciones. O serán jueces de derecho en toda la extensión de la palabra, sometidos a las normas severas del hermetismo legal, o serán jueces de conciencia que para fallar deberán despojarse —cosa difícil— de todo cuanto sea extraño al recto criterio del honesto y sencillo ciudadano lego.

*

A este respecto opino que los tribunales a crearse han de dictar sus fallos conforme al principio de las pruebas legales y no al sistema de las libres convicciones. No es del caso analizar en esta oportunidad las ventajas que se logran con uno u otro sistema, ya consideradas en otras ocasiones, pero creo, haciendo síntesis, que en atención al «medio», al nivel cultural de la educación de las masas, y teniendo fundamentalmente en cuenta la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual y la necesidad de asegurar la conservación y protección de la sociedad, el sistema a que me refiero es el que ofrece más sólidas garantías de mejor justicia.

No escapa a mi consideración la consistencia de los argumentos básicos del sistema opuesto, pero soy un convencido de que en general, el que preconizo es el que más nos conviene, sobre todo si se tiene en cuenta que, conforme a las cláusulas constitucionales en vigencia, puede el Poder Ejecutivo, haciendo uso de facultades que le son propias, humanizar en la práctica los rigorismos legales, atenuando (conmutando) o cancelando (indultando) sus consecuencias.

La adopción del sistema de las libres convicciones importaría el ensayo de una «novedad» sin arraigo dentro de nuestro medio, ensayo que resultaría peligroso para la seriedad de la justicia.



Por lo demás, no cabe duda de que debe existir una armonía estable entre el comienzo del ejercicio de la acción penal y el fallo que le pone término. Si éste va a ser dictado conforme al principio de las libres convicciones, ¿qué necesidad habría de someter al juez instructor al rigorismo de la prueba legal para la constatación del cuerpo del delito y la averiguación de los partícipes de una infracción a la ley penal? ¿Qué necesidad de que quienes sean llamados a resolver en definitiva sobre la existencia o inexistencia del cuerpo del delito y sobre la imputabilidad sean jueces de derecho y no jurados legos? ¿No bastaría lisa y llanamente la formación de un jurado popular que resolviera en cada caso, conforme a sus íntimas convicciones, independientemente de todo formulismo o existencia legal, los puntos enunciados?

Creo en definitiva, que si bien en algunos casos las libres convicciones permiten acercarse a soluciones más humanas en la concepción colectiva de lo «justo», en muchos otros tendríamos que lamentar resoluciones que por lo arbitrarias y caprichosas, pondrían en peligro en sus propias bases, la estabilidad de nuestra organización social. Hay que buscar leyes que sean, al decir de Adam Ferguson, no meras resoluciones, «o máximas de un pueblo determinado para ser libre, no como meros escritos por los cuales manténganse en la memoria sus derechos, sino como un poder erigido para guardarlos y como una barrera que el «capricho» de los hombres no pueda franquear».

*

Concordante con los puntos de vista de esa Comisión, *pienso hoy, como pensaba en 1926* (me refiero a las ideas expuestas en mi folleto «Deficiencias del Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires»), *que la instrucción del sumario de prevención no puede ni debe dejarse en manos de la policía, como en la actualidad ocurre.*

La acción nefasta de los caudillos políticos de todos los tiempos, ha mantenido siempre a la policía en un nivel muy por debajo de lo que fuera necesario para que pudiera cumplir satisfactoriamente con su misión, no sólo de vigilancia, sino con la que es mucho más difícil y delicada, la de auxiliar de la justicia del crimen e instructora de los sumarios de prevención.



Estos, los caudillos políticos de todos los tiempos —salvo raras y por cierto muy honrosas excepciones— han tenido siempre en la institución policial el refugio obligado de sus más ponderados elementos y así, con la complacencia censurable de Jefes, Ministros y hasta Gobernadores, les ha sido muy fácil convertir en Comisario a un sencillo comerciante de campaña, o transformar en oficial a quien hasta el día anterior pudo haberlo sido excelente... pero de cualquier oficio manual.

Con estos elementos que buscan en la policía vida cómoda y regalada, uniforme vistoso y un buen caballo para deslumbrar con su apostura a las niñas lugareñas, no es posible que se persiga con eficacia a los malandrines y que los sumarios se instruyan como el código lo dispone.

Recordaba entonces el caso siempre actual de un comisario de campaña, a quien por aquellos años de Dios le fué devuelto un sumario para que diera cumplimiento a una disposición legal que concreta y expresamente se le citaba. En presencia de un problema tan simple, el aludido comisario creyó innecesario ojear el código y ver qué era lo que se le mandaba hacer, disponiendo en definitiva la práctica de una diligencia extraña a la ordenada y devolver las actuaciones, lo más fresco.

Demás está que el correctivo que se le aplicó no habrá servido sino para que lo ascendieran y así el comisario de marras habrá continuado creyéndose capacitado para interpretar la ley, sin conocerla.

Mientras la policía continúe supeditada a los poderes públicos, toda tendencia a su mejoramiento fracasará en forma lamentable. La acción de los caudillos no dejará de hacerse sentir y entre los dictados de la recta conciencia, las exhortaciones de los Jefes, las instrucciones terminantes y categóricas de los jueces, y las órdenes de aquéllos, los pobres empleados terminarán por obedecer a los caudillos, de quienes creen que depende su estabilidad, con el resultado de que, muchas veces, no sólo pierden el puesto, sino que esta obediencia los lleva a la cárcel.

Y los otros empleados en cambio, los que no se dejan suggestionar por las insinuaciones, los que no son capaces de subordinar conveniencias personales más o menos mezquinas al estricto cumplimiento de sus deberes de funcionarios, tendrán que chocar siempre con los caudillos exigentes que consideran a la po-



licia un instrumento eficaz puesto a su servicio por los poderes públicos, para el fácil logro de propósitos más o menos infesables. Y así es como los pocos empleados de carrera, honestos y capaces, se ven siempre obstaculizados en su acción por los segundones de barrio, quienes confundiendo la comisaría con el comité, no trepidan en pretender el silencio y la ocultación de los delitos más execrables y la libertad inmotivada de los «amigos» de más baja ralea.

Es necesario, pues, para que la justicia sea realmente rápida, barata y expeditiva, evitar las dilaciones a que conduce el sistema actual, en el que el abandono de algunos, la incompetencia de otros y por qué no repetirlo con la misma virilidad de diez años atrás, la deshonestidad y el servilismo incondicional de muchos, desfigura la realidad de los hechos, cargando o suavizando las tintas, según la ignorancia o el interés lo aconsejen y haciendo del esclarecimiento de la verdad un mito inalcanzable.

El establecimiento de la justicia de instrucción letrada, a base de jueces inamovibles mientras dure su buena conducta, garantizará a mi juicio, en forma plena, la seriedad, la honestidad y la inteligencia, siempre — claro está, que los gobiernos elijan para los cargos de entre los buenos los mejores,— condiciones tan indispensables cuando están de por medio no ya los intereses materiales de las personas, los que por ser tales son de un valor secundario, sino la libertad individual, cuyo concepto encierra lo más sagrado, lo más respetable y lo que constituye el más alto valor para el pueblo.

Y es necesario para que la justicia de instrucción sea una verdad y no una burda parodia, organizarla de modo de evitar en todo cuanto sea posible la intervención directa de la policía en los sumarios de prevención y hacer posible que el juez se constituya en el lugar del hecho sin dilaciones que faciliten o permitan tal vez la modificación de las cosas en perjuicio o beneficio del sujeto activo del delito, modificaciones que ya provengan de la simple ignorancia o de la parcialidad deliberada, producen idénticos e irreparables inconvenientes.

No creo en cambio, como no creía entonces, a pesar del fundamental vuelco económico desfavorable, en que el establecimiento de la justicia de instrucción letrada resulte tan gravoso para las arcas provinciales, al extremo de considerarlo irrealizable.



Si para la vista de las causas en juicio oral por tribunales colegiados deberán establecerse en los distintos departamentos judiciales de la Provincia, en reemplazo de los actuales juzgados del crimen tales tribunales, el cambio —como más adelante lo demostraré — lejos de ocasionar ingentes gastos, redundará en apreciable economía que cubrirá, en gran parte, las erogaciones que demande el establecimiento de los juzgados de instrucción.

Tenemos, para empezar por la cabeza, el Departamento de la Capital, servido en la actualidad por una cámara de apelación, cinco juzgados de primera instancia y tres fiscalías en lo Criminal y Correccional, cuyo presupuesto anual asciende a la suma de trescientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos moneda legal (\$ 384.960 ⁷⁰/₁₀₀).

En mi entender, en dicho Departamento Judicial de la Capital, bastarían un Tribunal de nueve miembros, dividido en tres salas, y doce juzgados de instrucción.

Cada una de las salas vería en juicio oral las causas correspondientes a cuatro de los juzgados de instrucción y para facilitar la acción de éstos, dividiría el Departamento Judicial de la Capital, en diez secciones.

La primera de estas secciones, estaría exclusivamente integrada por el partido de La Plata, con una población aproximada de unos ciento ochenta y dos mil cuatrocientos un habitantes y los hechos que en la misma se produjeran estarían atendidos por dos juzgados de instrucción. Los datos de población de La Plata, así como los restantes que se irán dando, han sido tomados de la «Guía de la Policía, 1932».

La segunda sección, comprendería al partido de Avellaneda con una población de doscientos catorce mil quinientos sesenta y seis habitantes, y estaría también atendida por dos juzgados de instrucción.

Departamento de la Capital

SECCION 1ª

La Plata 182.401 habitantes

SECCION 2ª

Avellaneda 214.566 habitantes

Las ocho secciones restantes tendrían, cada una, su juzgado de instrucción. La tercera comprendería los partidos de San Martín y General Sarmiento, con una población de noventa y dos mil novecientos ochenta y ocho habitantes.

SECCION 3*

San Martín	74.837 habitantes
General Sarmiento	18.151 »
<hr/>	
Total	92.988 habitantes

La cuarta estaría integrada por los partidos de Quilmes, Almirante Brown, San Vicente y Florencio Varela, con una población de noventa mil doscientos veinte habitantes. La quinta estaría formada por los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, con ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete habitantes. La sexta, los partidos de Las Conchas (Tigre), San Fernando, San Isidro y Vicente López, con una población de ciento diez y seis mil cuatrocientos noventa y siete habitantes. La séptima, los partidos de José F. Uriburu (Zárate), Campana, Pilar y Exaltación de la Cruz, con ochenta y ocho mil novecientos cuatro habitantes. La octava, los partidos de Seis de Septiembre (Morón), Matanza (San Justo), Moreno, Marcos Paz, Merlo y General Rodríguez, con noventa mil setecientos treinta y ocho habitantes. La novena, los partidos de Saladillo, Lobos, Navarro, Roque Pérez y General Las Heras, con ochenta y nueve mil cuatrocientos diez y seis habitantes. Y la décima, los partidos de Chascomús, Magdalena, Coronel Brandsen, General Paz, General Belgrano, Monte y Cañuelas, con una población de noventa y nueve mil doscientos cincuenta y siete habitantes.

SECCION 4*

Quilmes	55.309 habitantes
Almirante Brown	19.756 »
San Vicente	8.278 »
Florencio Varela	6.877 »
<hr/>	
Total	90.220 habitantes



SECCION 5*

Lomas de Zamora	80.300 habitantes
Esteban Echeverría	7.147 »
Total	87.447 habitantes

SECCION 6*

Las Conchas	23.218 habitantes
San Fernando	34.688 »
San Isidro	28.591 »
Vicente López	30.000 »
Total	116.497 habitantes

SECCION 7*

Zárate	34.462 habitantes
Campana	22.061 »
Pilar	20.532 »
Exaltación de la Cruz	11.849 »
Total	88.904 habitantes

SECCION 8*

Seis de Septiembre	36.533 habitantes
Matanza (San Justo)	25.220 »
Moreno	9.547 »
Marcos Paz	6.879 »
Merlo	6.302 »
General Rodríguez	6.237 »
Total	90.738 habitantes

SECCION 9*

Saladillo	20.285 habitantes
Lobos	24.567 »
Navarro	16.107 »
Roque Pérez	11.881 »
General Las Heras	7.576 »
Total	89.416 habitantes



SECCION 10

Chascomús	23.078 habitantes
Magdalena	20.404 »
Coronel Brandsen	9.485 »
General Paz	12.479 »
General Belgrano	12.419 »
Monte	9.695 »
Cañuelas	11.697 »
<hr/>	
Total	99.257 habitantes



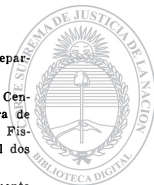
Los jueces de instrucción, dentro del sistema que ideo, serán verdaderos jueces-fiscales, dueños de la acción pública, al estilo de los attorney norteamericanos y por ello será innecesario la creación de otros funcionarios que representen a la sociedad, ya que ellos mismos deberán llevar en el juicio oral la acusación correspondiente.

La organización judicial que proyecto, tendría en el Departamento Judicial de la Capital, el siguiente —

PRESUPUESTO

	\$ 76	\$ 76
Nueve jueces de Cámara	1.450	13.050
Tres secretarios de sala	720	2.160
Seis auxiliares principales (ujieres y oficiales primeros)	315	1.890
Tres auxiliares sextos (encargados Mesa de Entradas)	180	540
Doce auxiliares séptimos	165	1.980
Tres ayudantes 1° (ordenanzas)	130	390
Gastos para cada sala	150	450
Doce jueces de instrucción	1.000	12.000
Doce oficiales 7° (secretarios)	440	5.280
Veinticuatro auxiliares 7°	165	5.280
Doce ayudantes 1° (ordenanzas)	130	1.560
Gastos para cada Juzgado	100	1.200

Este presupuesto hace un total anual de quinientos treinta y tres mil quinientos sesenta pesos (\$ 533.560), o sea ciento cuarenta y seis mil seiscientos (\$ 146.600) pesos más, que



el actual presupuesto de la Justicia del Crimen del Departamento de la Capital.

Hagamos lo propio con el Departamento Judicial del Centro, que en la actualidad está servido por una Cámara de Apelación, tres Juzgados de Primera Instancia y tres Fiscalías, que cuestan por año doscientos setenta y un mil doscientos sesenta pesos moneda nacional (\$ 271.260 ₱n).

Considero que en dicho Departamento, teniendo en cuenta su extensión y la densidad de su población, un Tribunal de tres miembros no daría abasto y propongo uno de seis jueces, dividido en dos salas de tres, con ocho juzgados de instrucción, que reemplazarían el organismo actual.

Dividiría este Departamento en ocho secciones, a cargo cada una de un Juzgado de Instrucción. La primera sección estaría integrada por los partidos de Mercedes, Luján, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y Suipacha, con una población de ciento tres mil ochocientos ochenta y seis habitantes.

La segunda sección estaría compuesta por los partidos de Marcelino Ugarte (Salto), Chacabuco y Carmen de Areco, poblados por ochenta mil ochocientos treinta y tres habitantes.

Departamento del Centro

SECCION 1ª

Mercedes	38.157 habitantes
Luján	25.415 »
San Andrés de Giles	16.790 »
San Antonio de Areco	15.821 »
Suipacha	7.703 »
Total	103.886 habitantes

SECCION 2ª

Salto	12.608 habitantes
Chacabuco	46.376 »
Carmen de Areco	21.849 »
Total	80.833 habitantes



La sección tercera comprendería los partidos de Chivilcoy, Veinticinco de Mayo y Alberti, con una población de ciento quince mil ciento veintidós habitantes. La cuarta los partidos de Junín, Bragado y General Viamonte, con ciento diez y seis mil trescientos cuarenta y cuatro habitantes. La quinta: Nueve de Julio, Bolívar y Carlos Casares, con ciento once mil setecientos ochenta y cinco habitantes. La sexta los partidos de Lincoln, Pehuajó y Leandro N. Alem (Vedia), con ciento dos mil ochocientos noventa y dos habitantes. La séptima los partidos de General Villegas, General Pinto y Rivadavia, con setenta y cinco mil cuarenta y tres habitantes. Y la octava y última, los partidos de Trenque Lauquen, Pellegrini y Carlos Tejedor, con una población total de sesenta y ocho mil doscientos noventa y seis habitantes.

La nueva organización tendría, en el Departamento Judicial del Centro, el siguiente —

PRESUPUESTO

	\$ %	\$ %
Seis Jueces de Cámara	1.450	8.700
Dos secretarios de sala	720	1.440
Cuatro auxiliares principales (ujieres y oficiales primeros)	315	1.260
Dos auxiliares sextos (Encargados Mesa de Entradas)	180	360
Ocho auxiliares séptimos	165	1.320

SECCION 3ª

Chivilcoy	52.487 habitantes
Veinticinco de Mayo	46.693 »
Alberti	15.942 »
Total	115.122 habitantes

SECCION 4ª

Junín	55.854 habitantes
Bragado	37.527 »
General Viamonte	22.963 »
Total	116.344 habitantes

SECCION 5*

Nueve de Julio	46.541 habitantes
Bolívar	40.658 »
Carlos Casares	24.586 »
Total	111.785 habitantes

SECCION 6*

Lincoln	37.346 habitantes
Pehuajó	47.691 »
Leandro N. Alem	17.855 »
Total	102.892 habitantes

SECCION 7*

General Villegas	29.968 habitantes
General Pinto	24.350 »
Rivadavia	20.725 »
Total	75.043 habitantes

SECCION 8*

Trenque Lauquen	24.974 habitantes
Pellegrini	22.974 »
Carlos Tejedor	20.349 »
Total	60.296 habitantes

	\$ %	\$ %
Dos ayudantes 1° (ordenanzas)	130	260
Gastos para cada sala	150	300
Ocho jueces de instrucción	1.000	8.000
Ocho oficiales 7° (secretarios)	400	3.520
Diez y seis auxiliares 7°	165	2.640
Ocho ayudantes 1° (ordenanzas)	130	1.040
Gastos para cada Juzgado	100	800

La nueva organización demandaría un gasto de trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta pesos moneda legal





(\$ 355.680 m/l), o sea un excedente, sobre el presupuesto actual, de ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinte pesos (\$ 84.420).

En este Departamento Judicial del Centro, de las tres fiscalías actuales, dos quedarían para lo Civil y Comercial y la restante se suprimiría.

Los restantes departamentos del Norte, Sud, Sud Oeste y Costa Sud, estarían servidos, cada uno por un Tribunal de Sentencia, de tres miembros y cuatro juzgados de instrucción.

A sus efectos, dividiría el Departamento del Norte, en cuatro secciones.

La primera sección comprendería los partidos de San Nicolás y Ramallo, con una población de sesenta y cinco mil trescientos cincuenta y nueve habitantes. La segunda estaría integrada exclusivamente por el partido de Pergamino, con una población de setenta mil trescientos sesenta y siete habitantes.

Departamento del Norte

SECCION 1ª

San Nicolás	40.688 habitantes
Ramallo	24.691 »
Total	65.359 habitantes

SECCION 2ª

Pergamino	70.367 habitantes
-----------------	-------------------

SECCION 3ª

San Pedro	32.773 habitantes
Bartolomé Mitre	29.775 »
Baradero	24.354 »
Total	86.902 habitantes

SECCION 4ª

Rojas	27.521 habitantes
Colón	15.872 »
General Arenales	13.245 »
Total	56.638 habitantes



La sección tercera estaría formada por los partidos de San Pedro, Bartolomé Mitre y Baradero, poblados por ochenta y seis mil novecientos dos habitantes y la cuarta, y última comprendería los partidos de Rojas, Colón y General Arenales, con cincuenta y seis mil seiscientos treinta y ocho habitantes.

Igual subdivisión proyecto para el Departamento Judicial del Sud Oeste. La primera sección comprendería los partidos de Azul y Juárez, que al efecto se pasaría, en lo Criminal y Correccional, del Departamento de Costa Sud, con una población de sesenta y siete mil cuatrocientos veintinueve habitantes. La sección segunda estaría formada por los partidos de Tandil, que en el fuero criminal dejaría de integrar el Departamento de la Capital y Rauch, con una población de sesenta y siete mil quinientos trece habitantes. La tercera sección comprendería los partidos de Olavarría, General Lamadrid y Laprida, con una población de sesenta y ocho mil trescientos sesenta y cuatro habitantes, y la cuarta y última estaría compuesta por los partidos de Las Flores, General Alvear y Tapalqué, con cuarenta y ocho mil tres habitantes.

Departamento del Sud Oeste

SECCION 1ª

Azul	47.010 habitantes
Juárez	20.419 »
Total	67.429 habitantes

SECCION 2ª

Tandil	52.647 habitantes
Rauch	14.866 »
Total	67.513 habitantes

SECCION 3ª

Olavarría	39.868 habitantes
General Lamadrid	16.862 »
Laprida	11.634 »
Total	68.364 habitantes

SECCION 4*

Las Flores	26.917 habitantes
General Alvear	9.013 »
Tapalqué	12.073 »
Total	48.003 habitantes

Dividiría el Departamento Judicial del Sud también en cuatro secciones. La primera sección comprendería los partidos de Dolores, Pila, Castelli, General Guido (Vecino), General Conesa (Tordillo), General Lavalle, Maipú y General Madariaga con una población de setenta y tres mil novecientos setenta y tres habitantes.

La sección segunda estaría integrada por los partidos de Balcarce, Ayacucho y Mar Chiquita, con una población de sesenta y seis mil ochocientos diez y seis habitantes.

La tercera sección estaría formada por los partidos de General Pueyrredón y General Alvarado, con cincuenta y nueve mil ciento diez y nueve habitantes y la cuarta por los partidos de Necochea y Lobería, con una población de cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho habitantes.

El Departamento Judicial de Costa Sud, debería también subdividirse en cuatro secciones. La primera estaría formada exclusivamente por el partido de Bahía Blanca, con una población de ciento tres mil cuatrocientos treinta habitantes.

La segunda sección comprendería los partidos de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles y González Chaves, con una población de noventa y nueve mil sesenta y ocho habitantes.

Departamento del Sud

SECCION 1*

Dolores	21.892 habitantes
Pila	3.921 »
Vecino	7.199 »
Castelli	7.143 »
Tordillo	2.697 »
Maipú	9.440 »
General Madariaga	10.841 »
General Lavalle	5.420 »
Total	73.973 habitantes



SECCION 2ª

Balcarce	34.461 habitantes
Ayacucho	21.231 »
Mar Chiquita	11.124 »
Total	66.816 habitantes

SECCION 3ª

General Pueyrredón	50.084 habitantes
General Alvarado	9.035 »
Total	59.119 habitantes

SECCION 4ª

Necochea	33.288 habitantes
Lobería	23.960 »
Total	57.248 habitantes

Departamento de Costa Sud

SECCION 1ª

Bahía Blanca	103.430 habitantes
--------------------	--------------------

La tercera sección estaría integrada por los partidos de Coronel Suárez, Adolfo Alsina, Guaminí y Caseros, con ochenta y tres mil quinientos habitantes y la cuarta y última abarcaría los partidos de Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist y Villarino, con ochenta y cinco mil trescientos setenta y nueve habitantes.

Como estos cuatro Departamentos tendrían el mismo personal e idéntico presupuesto, para evitar repeticiones inútiles, paso a formularlo en forma global.

PRESUPUESTO

	\$ %	\$ %
Doce Jueces de Cámara	1.450	17.400
Cuatro secretarios	720	2.880
Ocho auxiliares principales (ujieres y oficiales primeros)	315	2.520





	\$	\$
Cuatro auxiliares sextos (Encargados Mesa de Entradas)	180	720
Diez y seis auxiliares 7°	165	2.640
Cuatro ayudantes 1° (ordenanzas)	130	520
Gastos para cada sala	150	600
Diez y seis Jueces de Instrucción	1.000	16.000
Diez y seis oficiales 7° (secretarios)	440	7.040
Treinta y dos auxiliares 7°	165	5.280
Diez y seis ayudantes 1° (ordenanzas)	130	2.080
Gastos para cada Juzgado	100	1.600

Este presupuesto hace un total anual de seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos, o sea un gasto en más de doscientos ochenta y cinco mil trescientos veinte pesos sobre el actual presupuesto de la Justicia del Crimen en los mismos Departamentos.

SECCION 2ª

Tres Arroyos	47.257 habitantes
Coronel Dorrego	18.660 »
Coronel Pringles	20.790 »
González Chaves	12.361 »
Total	99.068 habitantes

SECCION 3ª

Coronel Suárez	31.015 habitantes
Adolfo Alsina	23.273 »
Guaminí	16.340 »
Caseros	12.872 »
Total	83.500 habitantes

SECCION 4ª

Patagones	12.399 habitantes
Puan	22.882 »
Saavedra	17.603 »
Tornquist	11.717 »
Villarino	15.778 »
Total	85.379 habitantes

En resumen, el establecimiento de la justicia de instrucción letrada en la Provincia, no costaría más de quinientos diez y seis mil trescientos cuarenta pesos sobre el presupuesto actual de la justicia del crimen, salvo error u omisión.

*

El juez de instrucción, terminado el sumario, lo elevaría al Tribunal con el acta de acusación o pidiendo su archivo. El presidente dictaría el auto de *ha o no ha lugar a la acusación*, con apelación ante el Tribunal. El no ha lugar aparejaría el archivo de las actuaciones, mientras que la resolución contraria se completaría con la inmediata fijación de la fecha para la vista de la causa.

*

Al juicio oral, además del acusado, comparecerían testigos y peritos, a los efectos de la ampliación de los interrogatorios y aclaraciones pertinentes, sin que dejen de tener valor pleno las diligencias del sumario, testigos y peritos, que serían interrogados directamente por las partes, con el control y dirección del tribunal.

*

Cada uno de los miembros de los tribunales colegiados, será juez de faltas para la vista de las causas de juegos y las de actual competencia de la justicia de Paz, en juicio oral y público y las fallará con arreglo al sistema de las libres convicciones, lo que haría posible que en los delitos levisimos, la justicia pueda ser, si cabe, más humana. Actuarían como acusadores y defensores personas del pueblo designadas anualmente por la Suprema Corte, a propuesta en terna de los concejos deliberativos de cada partido de la Provincia.

*

Los tribunales colegiados serían competentes en los recursos de amparo de la libertad y en los incidentes de eximición de prisión y excarcelación bajo fianza.

*

Aunque corra el riesgo de ser tildado de reaccionario, *me declaro sin reticencias partidario del secreto del sumario*, sobre todo si éste ha de estar a cargo de jueces letrados.





La publicidad conspira contra la eficacia de la represión y dificulta, cuando no imposibilita, la investigación de los hechos.

Los excesos, tan frecuentes en los señores defensores, que no ven en sus clientes sino inocentes perseguidos, llegan en la práctica a extremos incalificables, y al amparo del pernicioso liberalismo de las leyes, la vindicta pública se ve a diario burlada.

Más tarda en ser detenido un pájaro de cuenta, que en llegar a la prevención su defensor, comisionado por el comité pro-presos sociales o pro-presos políticos o porque simplemente es un industrial del *habeas corpus* o de la excarcelación bajo fianza. Revisa el sumario, ve y habla con el preso, so pena de ir a plantear ante quien corresponda, la infaltable acusación contra los policías, lo instruye convenientemente y corre en procura de su libertad. Y como si las leyes fueran poco liberales, es necesario todavía, a base de interpretaciones arbitrarias, hacer más ancho el margen de la libertad provisional, y por ende más importante el índice de la impunidad.

*

Creo que debe mantenerse, sino ampliarse, la facultad acordada por la legislación vigente con relación a la incomunicación del acusado en las causas graves, e igual cosa opino con respecto al término de la prevención.

*

Opino, en cambio, que pasado el sumario al tribunal de sentencia, deben señalarse a éste términos breves para la substanciación del juicio, buscando la mayor rapidez sin desmedro de la seriedad.

*

Otro de los puntos en que considero conveniente reaccionar, es en lo tocante a la diligencia de reconocimiento en rueda, tan importante cuando ha de entrarse al campo peligroso y difícil de la prueba indirecta.

Con el sistema actual, como los altos ideales de la justicia han de subordinarse, por razones obvias, a la tranquilidad personal de los testigos, éstos cuando se encuentran en presencia de delinquentes temibles, aunque los reconozcan por temor a represalias, afirman lo contrario, y así, lo que debiera ser una



poderosa presunción de cargo, se torna en una importante presunción de descargo.

Debe volverse, consecuente con lo anteriormente expuesto al reconocimiento hecho en forma de que los que formen la rueda, no puedan ver al testigo. Sólo así podrá obtenerse resultado práctico de tan importantes diligencias procesales.

Ello no importaría, a mi juicio, vulnerar la garantía de la defensa en juicio, toda vez que el tribunal, al analizar y valorar la prueba de testigos conforme a las reglas de la sana crítica, deberá buscar prolijamente la razón del dicho para compenetrarse de si el testigo ha dicho o no la verdad.

*

Contra los fallos de los tribunales colegiados y aún contra los de los jueces de faltas, acordaría como único recurso el de casación. En el primero de los casos, para ante la Suprema Corte y en el segundo, para ante el tribunal colegiado correspondiente.

*

Y mil cosas más tendría que exponer, sino fuera porque la tarea diaria y el apremio del tiempo ponen coto a mis impulsos.

Por tales motivos doy por terminada esta respuesta, no sin repetir las palabras de uno de los miembros de la comisión y ellas son que «nuestros problemas deben ser resueltos conforme a nuestros hechos y de acuerdo con las necesidades de la Provincia». (Moreno: «El Problema Penal», segunda edición, página 188), y con la esperanza de que alguna de estas sugerencias resulte de utilidad para la solución del importante problema en que está empeñado el Gobierno.

Dios guarde a ustedes.

N. MARIO JUÁREZ GARCÍA.

—

**NOTA A LOS COLEGIOS DE ABOGADOS
DE LA PROVINCIA**







Señor Presidente del Colegio de Abogados de . . .

Por encargo del Poder Ejecutivo, según decreto de 5 de abril del corriente año 1935, debemos ocuparnos de redactar los siguientes proyectos:

- a) Código de Procedimientos en lo criminal y correccional;
- b) Organización de la justicia en lo criminal y correccional;
- c) Organización carcelaria, comprendiendo el régimen local de los establecimientos para penados y detenidos, las modificaciones y ampliaciones en ambos y las reformas que se consideren convenientes;
- d) Patronato de liberados;
- e) Menores delinquentes, imputables y no imputables y menores abandonados o que por cualquier causa deban estar a cargo del Estado;
- f) Registro local de reincidencias;
- g) Procedimientos sobre faltas y normas generales respecto a éstas.

Pensamos presentar en primer lugar los proyectos referentes a Código de Procedimientos y ley orgánica de la justicia represiva, ocupándonos de esos dos asuntos en conjunto, por cuanto la organización judicial se encuentra íntimamente vinculada al sistema procesal que se establezca. De acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo, en que se designó esta comisión y de las opiniones vertidas en la Convención Reformadora de la Constitución de 1934, debemos redactar el proyecto de Código de Procedimientos bajo la base del juicio oral y público. Esto requerirá no solamente un cambio completo en la estructura del Código vigente, sino también una transformación en la organización judicial, desde que será preciso crear tribunales y auxiliares y ponerlos en movimiento con normas diferentes a las que hoy se encuentran en vigor.

Dentro del país, no se cuenta con una legislación como la que se proyecta, por cuanto en el orden nacional y en las provincias domina el procedimiento escrito no obstante los principios constitucionales referentes al jurado.

La idea de transformar el sistema, se ha discutido mucho y se han presentado ejemplos extraídos de las leyes y prácticas



de otros países, donde las causas criminales se tramitan con más rapidez que entre nosotros.

Seguramente, todos los letrados que han podido percibir los inconvenientes de las demoras en la sustanciación, las dificultades para recoger las pruebas mucho después de ocurridos los hechos y el problema que crean las cárceles de detenidos, a causa de la tramitación dilatada de los procesos, tienen opinión formada respecto al cambio de sistema o a la permanencia del mismo, desde que se trata de un asunto que se discute constantemente y que se conoce bien.

Nosotros debemos reunir el mayor número de opiniones para orientar nuestro trabajo, dado que aun en los puntos en que pudiéramos tener definición, esta puede modificarse si se presentan en contrario argumentos convincentes.

Hemos solicitado opinión a los señores magistrados y sería de todo interés contar también con la de los colegas. Pero como sería difícil dirigirnos a todos, consideramos que los colegas de abogados podrían prestarnos su colaboración.

Desde luego, recibiríamos con verdadero placer todo juicio que se nos quisiera hacer llegar al respecto y lo tendríamos en cuenta y con tanta más razón nos sería particularmente interesante el que pueda sernos remitido por su digno intermedio.

No enviamos un cuestionario, sometemos el problema integral y pedimos el concurso de las opiniones sobre el conjunto o sobre uno o varios detalles.

Estamos trabajando y pensamos continuar con rapidez, lo que por cierto no implica precipitación. Un asunto que está planteado desde hace años, acerca del cual se han escrito libros, se han presentado proyectos, se han pronunciado conferencias y se ha discutido en muchas oportunidades, está lejos de ser nuevo e imprevisto. Las personas que nos favorezcan con sus juicios, no pueden ser aquellas que deban empezar ahora a estudiar, sino las que ya por sus anteriores investigaciones, su ilustración y sus conocimientos, estén en condiciones de pronunciarse.

Rogando al señor Presidente su concurso, lo saludamos con toda consideración.

Respuesta del Colegio de Abogados de La Plata

La Plata, junio 5 de 1935.

Señores Miembros de la Comisión de reformas en materia procesal, carcelaria y de menores, doctores Rodolfo Moreno y Eusebio Gómez.

En mi carácter de Presidente del Directorio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de esta Capital, tengo el agrado de contestar la atenta comunicación de ustedes, de fecha 16 de mayo próximo pasado, por la que se solicita la opinión de este Colegio sobre los puntos que deben ser materia del cometido de esa Comisión y que en la aludida nota se detallan y enumeran.

Contestaremos en el orden en que han sido expuestos.

Al 1º y 2º punto A. y B.

Que este Colegio es partidario de la adopción del procedimiento oral y público, para todas las causas en materia penal.

Y como consecuencia considera:

a) Que el proceso debe substanciarse ante Tribunales Colegiados, compuestos por Jueces de derecho, que resuelvan en única instancia, por libre convicción, en las cuestiones de hecho y con recurso de casación, en las cuestiones de derecho.

b) Que nuestra organización judicial para adaptarse a tal reforma, debe establecer, entre otras las siguientes bases:

1º Creación del procedimiento acusatorio ante la justicia penal en la forma aconsejada por el proyecto de los doctores Rivarola y de la Colina (1911).

2º Reorganización del Ministerio Fiscal con las facultades y deberes necesarios al sistema a implantarse.

3º Formación de cuerpos técnicos auxiliares de la justicia penal.

*

Consideramos que la reforma en esta materia debe ser amplia y comprensiva de la actual orientación de la ciencia penal, ya que las leyes procesales han de ser la fiel expresión de las tendencias científicas del momento.





Creemos asimismo, que esa Comisión por la autoridad de quienes la forman, está en condiciones de traducir con fidelidad esa orientación.

No juzgamos oportuno detenernos a demostrar los inconvenientes del jurado popular, considerando que bastaría con referirnos a lo mucho que se ha escrito sobre el particular por distinguidos maestros de derecho, exponiendo sus innumerables defectos orgánicos y de adaptación a nuestro medio.

El jurado popular, se ha dicho con razón, no encuadra dentro de las exigencias científicas del juicio penal y no induce relación, ni con el grado de las libertades individuales, ni con su realidad práctica, ni con el sistema de gobierno adoptado.

El proyecto de ley sobre organización y atribuciones de la administración de justicia, de los señores Rodolfo Rivarola y Salvador de la Colina (1911), lo desechó con muy atinados fundamentos y el primero de dichos autores en diversos escritos se ha ocupado con la ilustración y competencia que posee en la materia, en igual sentido.

Los doctores Ramón Méndez, M. A. Montes de Oca y Pedro F. Agote, en el proyecto de Código de Procedimiento en lo Criminal, para la Justicia Federal de la Capital y Territorios Nacionales, de 1913, en un ilustrado informe se han ocupado del asunto y llegado a la misma conclusión, con argumentos, decisivos y concluyentes, a nuestro parecer.

En cambio, la forma que propiciamos ha merecido el auspicio de las más altas autoridades en esta materia.

Estas dos comisiones de reformas procesales, a las que citamos, no obstante los años que han transcurrido desde que proyectaran sus trabajos, por la indudable autoridad de sus componentes, han coincidido en la bondad de la institución, que importaría algo así como un «Jury calificado», decían los doctores Méndez, Montes de Oca y Agote.

El doctor Tomás Jofré, autor del sistema para las causas graves, que hoy rige, defendió calurosamente el proyecto de 1911, antes aludido.

Otro ilustre penalista, el doctor Tomás de Veiga, se manifestó igualmente entusiasta partidario de la institución, que él llamaba «jurado letrado permanente», y el doctor Ricardo Seeber afirmaba, siendo Presidente de la Cámara Criminal de la Capital, que sólo con ese sistema y organización del juicio



oral en Tribunales Colegiados de derecho, se lograría abreviar los juicios y obtener una rápida justicia. (Memoria del Tribunal, 1912).

Finalmente y para agregar antecedentes actuales, debemos señalar que el procedimiento fué proyectado en 1931 por la Comisión de reformas al Código de Procedimiento Penal, designada en ese año (enero 8) por el interventor doctor Clodomiro Zavalía y que componían los doctores Eduardo O. Ríos, Ismael Casaux Alsina y otros. (Proyectos de mayo 2 de 1931, artículos 206 y siguiente).

Por último, la Tercera Conferencia Nacional de Abogados reunida en Mendoza, del 6 al 11 de noviembre de 1933, sancionó un voto que fué informado por el doctor Eduardo O. Ríos, en el que expresó: «Que la incorporación a nuestra organización judicial de Tribunales Colegiados, compuestos por Jueces Letrados que resuelvan en única instancia, por libre convicción, las cuestiones de hecho, y con recurso de casación en las cuestiones de derecho, satisfaría las exigencias de una buena administración de justicia».

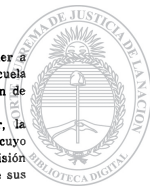
Al 3º punto C.

Que el régimen carcelario para penados debe propender, como finalidad, a obtener la regeneración del delincuente y como medio a que las cárceles llenen las necesidades científicas reclamadas para obtener tal fin.

Al defenderse la sociedad de la peligrosidad que significa el autor de un acto delictuoso, debe tratar de obtener su reforma por el trabajo, que crea hábitos de orden y disciplina y la reeducación de la persona anti-social, que viole la ley, para devolverlo a su seno como factor de orden y progreso.

La construcción de las cárceles, pues, deben ser tales que permitan la vida celular y la realización de aquellos propósitos más arriba enunciados, a los que consideramos debe ajustarse la represión penal.

Por la vía de la reforma del delincuente deberá buscarse evitar la reincidencia, sin lo cual no creemos que el estado llene la misión que le incumbe en este asunto, en que no puede conformarse únicamente con reprimir el delito.



La organización carcelaria para detenidos debe responder a evitar la promiscuidad del procesado, que es la mejor escuela de la delincuencia y la forma más eficaz de la propagación de todos los vicios.

El sistema a implantarse, debe igualmente establecer, la separación absoluta del procesado adulto y el menor, para cuyo efecto, estos últimos deberán cumplir su detención o prisión preventiva en institutos especiales y aún en el domicilio de sus padres o tutores e igual tratamiento deberá seguirse con las mujeres honestas o en estado de gravidez o con hijos en edad de lactancia, que podrían permanecer en su domicilio.

Al punto D.

La acción regeneradora del Estado, iniciada en los establecimientos carcelarios, no debe terminar allí, cuando cumplida la pena, vuelve a la sociedad al individuo que excluyó de ella por tiempo determinado.

Esa acción debe seguir al ex recluso, en sus primeros pasos al reingreso de este en el libre ambiente social.

Es una acción complementaria, de previsión y de protección.

Y tal es la obra que debe cumplir el «Patronato de Liberados», como función del Estado.

«Sería verdaderamente incompleto, se ha dicho, todo plan de organización carcelaria, si sólo tuviera en cuenta el régimen y vida del preso mientras cumple la pena de su reclusión y olvidara el momento difícil de su libertad, en que los recelos de su porvenir le turban y desequilibran».

Debe evitarse que la necesidad, el desamparo y el aislamiento repulsivo que se forma alrededor de un ex habitante de la población carcelaria, destruyan de un golpe toda una paciente obra de regeneración iniciada en la cárcel y vuelva por la senda del delito a quien, lanzado nuevamente a la vida libre, no encuentre otra disyuntiva para subsistir, que la de volver a delinquir.

Por eso decimos que la obra del Patronato es de previsión y de protección, complementaria de la realizada durante la reclusión y debe tender a que al abrirse al recluso las puertas de la cárcel, no encuentre cerradas las de las fábricas y talleres, donde honestamente puede trabajar en el oficio o aptitud que aprendiera.



El Patronato de Liberados, compuesto en la forma reglamentaria que mejor responda a las finalidades expuestas, debe funcionar bajo la superintendencia de la Dirección o Inspección General de Prisiones, que debe estar confiada como se ha expresado desde tiempo ha, a funcionarios de reconocida y probada competencia, pues es un organismo de suma importancia, por las funciones que ha de realizar.

Esa Dirección o Inspección, como quiera llamársele, ha de velar por el cumplimiento del régimen carcelario, en sus distintos aspectos, evitando que su aplicación pueda desvirtuarlo o establecer criterios equivocados o anárquicos, en los distintos establecimientos.

Debería asimismo, aparte de esa vigilancia técnica y administrativa, acumular todos los datos estadísticos necesarios para el estudio de la eficacia de los medios empleados para obtener la regeneración del delincuente y la reforma de la legislación.

Al punto E.

El problema de la defensa social contra la delincuencia es uno, aunque sean distintos sus factores y en razón de esta diversidad deban serlo también los medios de profilaxis a emplearse en su solución.

Es indudable que si se ha de atacar el mal en sus raíces, ha de comenzarse por prevenirlo cuando está en germen para evitar su desarrollo.

Creemos que a esto tienden todas las medidas que vienen dictándose y algunas en proyecto, sobre protección y amparo de los menores en general.

La ley número 10.903, de 21 de octubre de 1919, llena una parte de esas finalidades y la Provincia cuenta con algunos institutos que llenan aunque en parte reducida esa misión de protección y amparo de los menores.

Hay un convencimiento general de que ellos debieran ser ampliados en forma tal que los beneficios que prestan puedan llegar a un mayor número, pues sus resultados son ventajosamente apreciados.

En el Congreso existen iniciativas que contemplan el problema en todos sus aspectos y cuya urgencia en considerarlos ha sido reclamada por la Tercera Conferencia Nacional de Abogados, reunida en Mendoza en noviembre de 1933.



En cuanto a los menores delincuentes imputables o no imputables, creemos que la realización de las previsiones contenidas en el Código Penal a su respecto, dan la adecuada solución al asunto, de manera tal que a las provincias no queda otra tarea que la de crear los institutos de corrección o de protección correspondientes.

Esos institutos deben responder al objetivo de la regeneración por la educación y desarrollo físico de la infancia, considerando que establecimientos al estilo de la Colonia Nacional de Menores de Marcos Paz, pueden llenar cumplidamente esa misión, con las ampliaciones y reformas que el estado actual de la ciencia aconseja en esta materia.

Este importante asunto fué considerado también por la Tercera Conferencia Nacional de Abogados, que hizo suyas las conclusiones aprobadas por la Primera Conferencia Nacional sobre Infancia Abandonada y Delincuente, celebrada en la Capital Federal entre el 25 y 30 de setiembre de 1933 a iniciativa del Patronato Nacional de Menores y este Colegio se permite recomendarlas a la consideración de esa Comisión.

El Estado debe, pues, intensificar su acción de alta previsión social, acción preventiva, creando Patronatos de niños, Institutos protectores de la infancia, física o moralmente abandonada y llegar con su acción defensiva y previsor a hasta el propio hogar, donde una vida malsana, irregular de miseria, inmoral o viciosa, desvían al niño del verdadero cauce en que debe desarrollarse.

La segunda faz de esta acción defensiva y de regeneración se refiere particularmente a los menores delincuentes, imputables o no imputables, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal y se traduce en la creación de reformatorios especiales, libres de la vecindad de los delincuentes mayores.

El tratamiento ha de ser distinto aunque la finalidad es la misma, si nos encontramos frente a un menor legalmente imputable, que ha merecido una pena o que merezca simple corrección y educación por no serle imputable el delito cometido.

El desiderátum en esta materia consistiría en el establecimiento de Tribunales de Menores.



Al punto F.

Consideramos que el Registro local de reincidencia podrá prestar importantes servicios, pero que sin la existencia de una Oficina Central, de carácter nacional, sobre la materia su eficacia ha de ser relativa.

Como quiera que sea, su creación sería un gran paso en ese sentido, pues su creación es de una sentida necesidad en el país, a tal punto que como se ha dicho, apenas se concibe su falta en la República.

El acuerdo entre los poderes locales y el Gobierno central haría lo demás.

Al punto G.

Nadie desconoce, decía la Comisión redactora del Código Penal, que las provincias argentinas necesitan, como condición del cumplimiento de las leyes que dictan en ejercicio de sus derechos, imponer sanciones, es decir, *erigir la infracción en falta*. (Julio 16|917).

Tales palabras suministrarían un concepto sobre las faltas, que el Código Penal de 1887 siguiendo al código español, definía junto con el delito, como toda acción u omisión penada por la ley y que el proyecto Tejedor concibió como las contravenciones a que la ley señala penas de policía.

Comprendiendo la dificultad de establecer la verdadera naturaleza de la falta, decía el Dr. Rivarola, que lo más cuerdo sería admitir que es idéntica a la del delito y que la única distinción que debe buscarse es la del grado (Der. P. Arg. pág. 159).

Constituyen pues, las faltas, los grados inferiores de las infracciones que interesan principalmente a las costumbres locales de las provincias y sus instituciones, al orden público, la seguridad, moralidad, etc., (Rivarola, etc., 1906 —Moreno— La Ley Penal Arg. pág. 73|74).

El campo de acción de estas infracciones es amplio y él comprende los medios coercitivos de que debe valerse el poder público, Provincia, Municipalidades, Policía, para el cumplimiento de leyes especiales, ordenanzas o edictos, estableciendo las sanciones pertinentes dentro del límite fijado por C. Penal.

Teniendo en cuenta lo expuesto sobre la naturaleza de la falta, consideramos que las normas generales que rijan en



la materia han de establecer en primer término una diferenciación en el procedimiento según la clase de autoridad que ha de intervenir en su juzgamiento.

Los códigos actuales y algunos proyectos conocidos establecen las mismas reglas de procedimientos para juzgar estas infracciones ya se trate ante el Jefe de Policía, Comisarios, Intendentes Municipales, u otras autoridades administrativas. Según el Código de Procedimientos Penales de la Provincia, todas las infracciones, cualquiera sea su origen, se constatan en la misma forma y se rigen por las mismas reglas y de todas ellas se confiere el mismo recurso de apelación para ante el Juzgado del Crimen, quien condena o absuelve, en última instancia.

Para todas ellas existe igualmente un plazo perentorio de ocho días para su sustanciación desde su iniciación o levantamiento del acta de verificación hasta la declaración de pena y su notificación al infractor.

Si así no se hiciera, el acusado quedará libre de pena.

Tal sistema nos parece absolutamente inaceptable e inadecuado.

Si la legislación represiva sobre faltas ha de comprender todas las infracciones que hoy se consideran como tales, en nuestro medio ambiente y abarcar las tres clases de infracciones antes aludidas que podríamos llamar de carácter administrativo, policial y municipal, creemos que se impone su diferenciación no sólo en el procedimiento sino en la autoridad ante la cual se ha de apelar y la propia forma en que se ha de legislar.

Nos parece, que no habría ningún motivo de orden legal para que se legislaran como parte integrante de un código de procedimientos en materia *penal*.

Si bien es cierto que, como lo hemos dicho, aceptando opiniones de prestigiosos autores, no existe en esencia más que una distinción de grado con el delito, no lo es menos que el concepto de la falta es variable puesto que depende en muchos casos, de las instituciones que la ley crea y cuya intangibilidad se resguarda por medio de tales sanciones.

Pero como muy acertadamente se ha dicho, desaparecida la institución desaparece el carácter delictuoso (nosotros di-



ríamos, represivo) atribuido a la infracción contra la misma (Moreno — La Ley Penal arg. pág. 82).

Y esta inestabilidad, que no tiene el delito es el mejor fundamento para que no se reglamenten las faltas justamente con la organización de los procedimientos penales.

Bajo un punto de vista general, consideramos que las faltas podrían clasificarse en la siguiente forma:

Contra la salud pública. — (Infrac. a las reglas de higiene y salubridad pública). Engaños del comercio al público, en el peso, calidad o medida. Los que expendan mercaderías en violación a las reglas de salubridad pública, etc., etc.

Contra la salud pública. — Los que descuidan reparar edificios ruinosos o demolerlos. Los que depositen materias inflamables, corrosivas, etc., en lugares inadecuados, soltura de animales dañinos o peligrosos.

Contra la moralidad y buenas costumbres. — Ofensas procazes contra la mujer, venta de objetos, libros y estampas obscenos, quebrantamiento de los reglamentos en parajes públicos, plazas, baños, etc. La embriaguez.

Contra la vialidad pública. — Los que transiten por los caminos públicos a velocidades excesivas y contra los reglamentos existentes o que se dicten.

Contra la edilidad pública. — Los que causen daños o destrozos en edificios, monumentos, estatuas y paseos públicos.

Contra la credulidad pública. — Ejercicio de la adivinación, interpretación de sueños, anuncios comerciales engañosos, etc.

Contra el orden público. — El que promoviére escándalo en reuniones o lugares públicos, etc.

Los principios generales que reglarían las faltas antes determinadas, no excluyen naturalmente las que se determinen por leyes especiales ordenanzas o edictos policiales, aún cuando caigan dentro de tal clasificación.

Es evidente que hay en la Provincia una serie de leyes que crean infracciones o como se ha dicho, erigen la infracción en falta y que aún determinan el procedimiento a seguir para la aplicación de las sanciones que establecen.

Existe en esta materia de la legislación provincial un desconcierto bastante grande, que lleva a una verdadera confusión sobre el particular.



La ley electoral establece penas para los que impidan la celebración de las elecciones o formación del Registro Electoral o celebración del escrutinio instituyendo una numerosa serie de infracciones (artículos 110 y 112) y determinando en otros casos que se aplicarán las penas que estatuye el Código Penal (artículo 110 últ. part. y 111).

Dicha ley establece delitos y faltas electorales (artículos 115 y 117) y determina el procedimiento a seguir (artículo 120).

La ley orgánica municipal de noviembre 6 de 1933, establece penas para los responsables de acefalía por acción u omisión (artículo 147) entre otros de multas en otros casos (artículos 148, 61, 63, etc.).

Pero lo más interesante de esta Ley es que también contiene un capítulo especial en el que determina «*el procedimiento en las faltas*» (Cap. XXIII, artículos 156|163 y el siguiente).

La ley de diciembre 6 de 1916, creando el Departamento del Trabajo, en sus artículos 4 y 7 establece igualmente penas de multa o arresto equivalente, las que dispone serán aplicadas por el Departamento con apelación ante la Justicia del Crimen en cuyo recurso se aplicarán las disposiciones del procedimiento sobre faltas del Código de Procedimientos Penal (art. 9).

La ley sobre descanso dominical establece igualmente penas de multa, sin fijar ninguna forma de procedimiento para su aplicación y por el decreto reglamentario de esa ley se encarga a la Policía su cumplimiento.

Las leyes sobre enseñanza obligatoria y sobre el estado civil de las personas también establecen penas de multa a los que infrinjan algunas de sus disposiciones.

Entendemos que establecidas normas generales en esta materia de faltas, tales leyes han de arreglar sus disposiciones a ellas, aunque, como hemos visto de esta ligera enumeración, tales leyes no sólo establecen «faltas» sino delitos, que ateniéndonos a nuestros principios constitucionales sólo podría crear el Código Penal de la Nación.

*

Tal es a grandes rasgos la opinión de este Colegio sobre los puntos consultados.

Saludamos a Vds. con nuestra consideración más distinguida.

Alfredo della Croce,
Secretario.

T. BACIGALUP VERTIZ,
Presidente.

Nota al Director del Hospicio de Melchor Romero

La Plata, 6 de junio de 1935

Señor Director del Hospicio de Melchor Romero, Dr. Jorge Hirschi.

El Poder Ejecutivo nos designó oportunamente para proyectar leyes y resoluciones administrativas referentes a distintos aspectos de la represión. Hemos iniciado nuestro estudio y tenemos en carpeta reglamentos carcelarios y opiniones de funcionarios. Como en el Hospicio de su digna dirección se alojan procesados y penados de ambos sexos, habiendo además un pabellón especial para condenados varones, desearíamos de su gentileza, quisiera informarnos acerca del régimen que se sigue en ese establecimiento con referencia a los alienados delinquentes y autores de delito y de sus opiniones respecto a este asunto.

Sería interesante saber, si Vd. cree que es o no conveniente la permanencia de procesados y penados en la casa de su dirección o si deben tener en su concepto otro destino. Le quedaremos obligados a su colaboración que esperamos la devuelva con toda la extensión y antecedentes que crea del caso.

Salúdanlo muy atentamente.

RODOLFO MORENO, EUSEBIO GÓMEZ.



Contestación del doctor Hirschi

Melchor Romero, julio 31 de 1935.

Señores Miembros de la Comisión de Reforma Procesal, Carcelaria y de Menores, doctores Rodolfo Moreno y Eusebio Gómez.

En la nota aludida se me pide diga que régimen de internamiento respondo en forma substancial a las preguntas que me formulan en nota del 6 de junio del corriente año.

En la nota aludida se me pide diga que régimen de internación y vida llevan los alienados delinquentes y autores de delitos reclusos en este Hospital General y que opinión me merece dicho régimen y si es conveniente o no la permanencia de procesados y penados en este Establecimiento.

Sin duda alguna, no hay tema más debatido en medicina mental como el que se refiere a la situación y ubicación de los alienados y anormales que delinquen o delinquentes que se hacen alienados.

La sociedad al exigir la reclusión de los alienados, ha creado un problema social y como tal debe encarársele. Ball da esta solución en dos palabras, un derecho de defensa y un deber de protección.

En este Hospital General en que predominan como enfermos los alienados, existe un local de seguridad especial para hombres llamado Pabellón Lombroso. Consta éste de un cuerpo de edificio de dos pisos, con dos salas de 22 por 8 metros cada una y por piso y sus anexos de baños, letrinas, habitación para guardianes, etc.; el todo rodeado por alta reja de hierro para seguridad, que aísla este pabellón del resto del Establecimiento. Entre la reja de seguridad y el edificio existe un espacio libre que rodea a éste, espacio dividido en dos partes una anterior de 905 metros cuadrados y el posterior de 894 metros cuadrados, este último es el solo destinado a contener la población del pabellón durante el día, estos espacios libres no tienen protección alguna contra factores atmosféricos. Como se ve, un local de puro corte carcelario, sin compartimentos cubiertos para trabajo, régimen de vida carcelario y permanentemente un piquete de guardias de cárcel, hace guardia armada al pabellón. La población del Lombroso es de unos 170 reclusos término medio. Este local fué construido durante la Direc-





ción del doctor Korn; el destino inicial del mismo según datos recogidos en Memorias del Hospital fué albergar a alienados delincuentes, delincuentes que se hacían alienados y a retener en observación a acusados de hechos criminales y que era necesario dictaminar sobre su estado mental. Este orden inicial no duró mucho, pronto se vió desnaturalizado con la internación de delincuentes de todo orden y atacados de afecciones comunes variadas, procedían estos sujetos de las Cárceles, Penitenciarías y Presidio de Sierra Chica. La razón invocada era la falta de un hospital carcelario para la atención de estos enfermos. Esta aberración que hoy continúa, acarreó fallas actuales serias: 1°. Hacer vida en común de locos y normales mentalmente. 2° Tener que disponer una sala íntegra para la contención de enfermos de clínica médica o quirúrgica, mentalmente sanos y 3° La consecuente instalación de la guardia armada para vigilar estos sujetos.

Al asumir en marzo de 1934 la Dirección de este Establecimiento hallé que el Pabellón Lombroso llenaba papeles difíciles de definir y como antecedentes, recordaré que dicho local fué el centro de escándalos de todo orden y que llamaron la atención pública en su oportunidad. Hoy la existencia de reclusos responden a las siguientes etiquetas: 1° Alienados que han delinquido; 2° Delincuentes que se han hecho alienados; 3° Procesados y condenados que provienen de cárceles y penitenciarías, afectados de enfermedades de orden clínico o quirúrgico solamente; 4° Procesados en observación por presuntas alteraciones psíquicas; 5° Alienados del Establecimiento que se tornan peligrosos. Todo este conjunto heterogéneo que responde a los cinco tipos enunciados, viven dentro del reducido local del Lombroso en verdadera promiscuidad, ahí están mezclados seniles, adultos, menores — un homicida de trece años fué huésped en observación durante un largo tiempo — alienados peligrosos, simuladores en crecido número, sobre todo los que ingresan como enfermos comunes, penados que enloquecen en las Penitenciarías, alienados excitados, dementes inermes ya; profundamente descendidos mentalmente, epilépticos de suma peligrosidad, alcohólicos, viejos alienados delincuentes, sobreesidos; la mayoría homicidas y que son los pocos que demuestran cierta

aptitud para el trabajo y que por su estado gozan de libertad dentro del Hospital.

Todo este material humano enfermo ingresa al Establecimiento enviado por las autoridades carcelarias y por los Tribunales Judiciales de la Provincia, debiendo llenar para su ingreso ciertas formalidades.

De lo expuesto, surge claramente que ya no responde al tipo de establecimientos de esta índole que existen en el mundo. Este local es una mala cárcel y pésimo asilo, imposible por muchas razones darle orientación psiquiátrica, pues no existe ni disposición ni distribución para el trabajo y mucho menos ambiente; estos desgraciados están reducidos casi a la inmovilidad, echados o sentados con abandono, cultivando entre ellos el espíritu de indisciplina y de violencia y empujados los más infelices por simuladores y desequilibrados que siempre abundan en el ambiente, las requisas efectuadas diariamente por el personal de vigilancia hacen frecuentes secuestros de armas improvisadas con elementos primarios y peligrosísimas, construidas por los reclusos. Creo no exagerar al declarar que el viejo asilo francés de San Lázaro como Correccionario y Refugio de alienados en los siglos XVII y XVIII tiene con el Pabellón Lombroso puntos de semejanza y tal vez ventajas. San Vicente de Paul el admirable organizador del San Lázaro de la época de orden, repetiría hoy sin duda frente a este espectáculo «en una palabra es una verdadera arca de Noé».

Ahora bien no podré dejar de lado la parte económica, en este sentido es un desastre, debe conocerse lo que cuesta al Estado sostener esta deformidad. La guardia armada, que consta de un oficial, clases y soldados cuesta como remuneración mensual 2760 pesos, el racionamiento de esta misma tropa cuesta 220 pesos mensuales; total al año 35.760 pesos moneda nacional. El Establecimiento como es de presumir con la atención médica, amén del cuerpo de guardianes y encargados del Pabellón, etc., etc., cuestan estos servicios 30.000 pesos al año que sumados al costo de la guardia armada redondean la cantidad de 67.760 pesos moneda nacional, suma que ningún Hospicio cantonal suizo insume al contribuir al sostenimiento de admirables establecimientos.

Son conocidos, tres tipos corrientes, en los países civilizados de establecimientos, destinados al trato y reclusión de





alienados llamados peligrosos, término que seguiremos usando en adelante a cambio del de alienados delincuentes y delincuentes que se hacen alienados. El doctor Osvaldo Loudet dice: «no es posible admitir dentro de la lógica médica y de la clínica psiquiátrica las denominaciones de alienados delincuentes y delincuentes alienados. Los unos y los otros son alienados, es decir, enfermos mentales y deben ser tratados en clínicas psiquiátricas. La peligrosidad de estos sujetos no puede derivar entonces de que hayan delinquido antes de ser alienados o de que cometieron el delito después de su enajenación mental. La peligrosidad deriva de su fórmula clínica. Hay que partir de este principio general: todo alienado, por el hecho de serlo tiene su índice de peligrosidad, aunque no haya cometido un acto antisocial. Todo alienado, siendo un asocial, es un antisocial en potencia.

Existen formas clínicas de alienación mental de alto índice de peligrosidad y otras de mínimo índice. Un delirio alcohólico alucinatorio, una manía epiléptica, un delirio agudo o crónico de persecuciones, alucinatorio o interpretativo, presentan una gran peligrosidad, comparados con ciertos estados demenciales simples. Esto quiere decir, que pudiendo presentar los mal llamados alienados delincuentes y delincuentes alienados, todas esas formas clínicas de alienación mental, su peligrosidad puede ser mayor o menor o desaparecer, independientemente del antecedente judicial. Es la forma clínica la que da la fórmula de su peligrosidad. No puede admitirse, entonces, para clasificar un alienado de peligroso el antecedente de un delito anterior a su alienación. ¿No puede suceder acaso que un temible delincuente caiga en un estado de alienación mental que lo vuelva inocuo para todos los que lo rodean?

Hace más de treinta años el doctor Ingenieros escribía estas líneas, que todavía resultan de actualidad: «No existen locos delincuentes y locos no delincuentes, sino locos peligrosos y locos no peligrosos, siendo éste el único criterio que debe dar la medida de la reacción social contra el loco que comete un delito. Un loco puede no haber delinquido por habérselo impedido una reclusión a tiempo, y ser, sin embargo, peligrosísimo; otro puede haber delinquido bajo la influencia de un delirio ya curado y ser ahora, sin embargo, un sujeto absolutamente inofensivo, laborioso, útil. Para los juristas éste es «un delincuente



loco» que debe permanecer encerrado rigurosamente con ese carácter; mientras que el primero no merece mayor seguridad que la camisa de fuerza o la celda de un manicomio común. Este criterio es absolutamente falso. El psiquiatra criminalista que quiere ser consecuente con las modernas ideas de la escuela positiva, dirá que el loco que ha delinquido bajo la influencia de su delirio, deberá ser puesto inmediatamente en libertad si curado de la causa de su delito pudiese volver a ser un individuo laborioso e inofensivo; mientras que el primero, aunque jamás haya delinquido, debe ser rigurosamente aislado para siempre, a fin de evitar que sus malas tendencias se traduzcan en actos antisociales». (Ingenieros: «Dos páginas de psiquiatría criminal, Buenos Aires, 1900»).

Aludí anteriormente que pueden referirse a tres los tipos de establecimientos especiales destinados a los alienados peligrosos.

a) *Departamentos manicomiales anexas a las cárceles.* b) *Departamentos especiales anexas a los manicomios.* c) *Asilo central para alienados criminales o asilos regionales especializados.* La mayoría de los estados alemanes tiene pabellones para alienados criminales con una capacidad regular de 50 plazas y anexados a establecimientos penitenciarios, los alienados permanecen en estos establecimientos 6 a 12 meses; su no mejoría implica su internación en un manicomio común. Semejante a este sistema alemán es el seguido en Italia, por los manicomios-cárceles. Manicomios judiciales de Aversa, Reggio Emilia, de Monterupo, etc., pero estos establecimientos nada tienen de manicomio, el régimen de vida es carcelario. Francia tiene el asilo de Villejuif con un departamento especial destinado a perversos anormales y que se destina a los alienados peligrosos y criminales del departamento del Sena. Se fundó en 1910 y está aislado de los demás servicios del asilo. En Inglaterra y en América han dado excelente resultado los establecimientos destinados únicamente a los alienados criminales, los sistemas ingleses han sido perfeccionados en los Estados Unidos y por el régimen de vida resultan instituciones perfectas. Bélgica posee asilos especializados para los alcohólicos y toxicómanos y prevé la fundación de asilos para degenerados, anormales, y débiles mentales. En Suiza y en Noruega los delincuentes alcoholizados tienen asilos especiales. En nuestro país no ha faltado el es-



fuerzo de hombres especializados, entre ellos, el doctor Domingo Cabred; en el Congreso de Ginebra de 1896 hizo triunfar un voto en pro de la asistencia de esta categoría de insanos en asilos ordinarios y consecuencia con este principio fundó y organizó dentro del Hospicio de las Mercedes el Pabellón Lucio Meléndez allá por el año 1899, y destinado a: 1° procesados presuntos alienados; 2° condenados presuntos alienados; 3° condenados en los cuales se ha probado la alienación mental; 4° alienados peligrosos del mismo establecimiento. «Creo que ha sido un error, dice el doctor Osvaldo Loudet, mezclar en este Pabellón los diagnosticados definitivamente de alienación mental, con los simples procesados en observación y con los simuladores. También considero un error alojar con los alienados peligrosos a los alienados inocuos, por el solo hecho de que estos últimos tengan la nota judicial.

El origen de algunas revueltas sangrientas en ese pabellón, hay que buscarlo en esta promiscuidad de los simuladores con alienados más o menos dóciles y sugestionables. Los «presuntos delinquentes» — muchos de los cuales son simuladores peligrosos — deben ser observados en una sala especial y sometidos a una severa vigilancia».

En el año 1914, en el Congreso Penitenciario reunido en Buenos Aires, los doctores Helvo Fernández y Horacio P. Areco tratan y exponen su concepto sobre el tratamiento adecuado para los alienados delinquentes y delinquentes alienados y llegan a las siguientes conclusiones que exponen a consideración del Congreso: 1° Los alienados delinquentes y los delinquentes alienados son pasibles del mismo régimen hospitalario que los alienados comunes; la nota judicial no crea una variedad distinta de alienados.

2° Su tratamiento médico estará informado en los principios científicos, y las medidas de seguridad adaptadas a su temibilidad individual, exactamente como en los alienados comunes.

3° La nota judicial por si misma no impondrá en caso alguno medidas excepcionales de rigor o vigilancia.

4° En los manicomios comunes existirá una sección para enfermos peligrosos, donde se alojarán los alienados delinquentes temibles, durante el tiempo de su temibilidad.

5° El alienado delincuente disfrutará en su trabajo de todas



aquellas ventajas que la ciencia aconseje, sin que la nota judicial pueda coartar la libertad del médico.

6° Para los insanos de temibilidad irreductible — los locos amorales — contra los cuales son ineficaces los métodos terapéuticos actualmente conocidos, justificase cierta coerción privativa de libertad y una severa vigilancia en sección adecuada en el interior del asilo, como también su estada en la cárcel por tiempo indeterminado.

7° No constituyendo los alienados delincuentes y los delincuentes alienados variedades clínicas, el manicomio criminal, como institución autónoma, no tiene razón científica de existir.

8° Sólo al alienado peligroso, sea o no delincuente, debe aplicarse las medidas rigurosas de seguridad y vigilancia.

9° Durante la evolución de la dolencia queda suspendida la potestad del Juez, identificándose el alienado delincuente al alienado común.

10° Las funciones de los médicos de tribunales serán, durante este período, puramente de contralor, limitándose a establecer con peritaje la curación o remisión de la enfermedad, que coloca de nuevo al insano bajo la férula de la justicia.

11° El Juez que decreta el sobreseimiento definitivo por causa de alienación, ordenará que se interne al causante en el manicomio por todo el tiempo que dure su temibilidad.

12° La internación sólo cesará después de un peritaje médico, con la sanción judicial.

13° Las incidencias del proceso a las sanciones penales no deben influenciar en forma alguna el tratamiento del asilado.

14° La posición y responsabilidades del médico del hospicio son exactamente las mismas ante un alienado delincuente que ante un alienado común. Mientras dure la reclusión en el asilo es el director del establecimiento la potestad suprema. El «imperium» del juez limitase a sancionar su ingreso y su egreso.

15° Respecto a los delincuentes que se alienan durante la condena, dispondrá lo que convenga el director del Instituto de Criminología, quien podrá decretar su internación en el manicomio o su permanencia en la cárcel.

Estas conclusiones merecieron la más amplia discusión, oponiéndose a ellas los doctores Cabred y De Veiga; puestas a votación son rechazadas y en cambio se propone y vota, siendo apro-



bada, la siguiente conclusión «el tratamiento de los alienados delincuentes y de los delincuentes alienados debe efectuarse en establecimientos especiales, distintos de los manicomios comunes o en secciones particulares de estos mismos manicomios».

Esta conclusión que fué aprobada se debe al doctor Piñero.

No terminaríamos de transcribir opiniones, dadas en pro o en contra de tal o cual sistema y a pesar de todo lo hablado y escrito, el saldo que nos queda en carne propia, es decir, lo que podemos mostrar es pobre y lamentablemente deformado, el Pabellón Lombroso que forma parte de este Hospital General es una aberración que debe modificarse fundamentalmente por razones sociales y humanas; todo esto es la pura verdad.

Y propongo la solución adecuada, compartida por el distinguido Profesor de Psiquiatría doctor Arturo Ameghino y la del doctor Osvaldo Loudet de indiscutible preparación en esta materia y que es la siguiente: fundar dentro o fuera de este Establecimiento un «Hospital Psiquiátrico de Asistencia y Seguridad» para recluir alienados peligrosos, con secciones independientes para los distintos tipos a los cuales se refiere el artículo 34 del Código Penal. Esto en cuanto se refiere a hombres, y en cuanto a las mujeres en la misma situación, quedaría resuelto, con la fundación de un hospital en iguales condiciones. Sería interesante también la organización en las prisiones de un anexo psiquiátrico, de probados beneficios sobre todo en las prisiones Belgas y Alemanas. Sería este anexo, un sitio de observación psiquiátrica transitorio, para formas agudas o simples episodios psicopáticos, fuera de la inmediata y gran utilidad que tendría para la observación crimino-psiquiátrica de los delincuentes.

Saludo a ustedes atentamente.

J. HIRSCHI.





INDICE

Proyecto de Ley Organización de la Justicia e

Autor: Argentina. Ministerio de

Editorial: Oficial

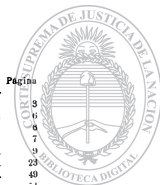
Toro: 1



J114



INDICE



	Página
Decreto del Poder Ejecutivo creando la Comisión y designando a sus componentes	3
Respuesta del Doctor Moreno	6
Nota del Doctor Gómez	6
Nota acompañando el proyecto de Ley Orgánica	7
Proyecto de Ley Orgánica de la Justicia en materia penal	9
Exposición de motivos	23
Encuesta. Nota a los Magistrados	49
Lista de los Magistrados a quienes se remitió la nota	54
Contestación del Doctor Valdovinos	56
» » Gomila	61
» » Dobarro	67
» » Gallegos	72
» » N. Mario Juárez García	77
Nota a los Colegios de Abogados de la Provincia	97
Respuesta del Colegio de Abogados de La Plata	101
Nota al Director del Hospicio de Melchor Romero	111
Contestación del Director Doctor Jorge Hirschi	112